

LIC. FRANCISCO GARRIDO PATRÓN,

Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, a los habitantes del mismo, sabed que:

LA QUINGUAGÉSIMA TERCERA LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO, EN USO DE LAS FACULTADES QUE LE CONFIEREN LOS ARTÍCULOS 40 Y 41 FRACCIÓN II DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO DE QUERÉTARO ARTEAGA, Y

CONSIDERANDOS

Que una de las finalidades primordiales del Estado es la realización del bien público, el cual se materializa a través de un conjunto de actividades que tienden a perfeccionar y garantizar tanto el funcionamiento del gobierno estatal como el cumplimiento de los objetivos encomendados a éste.

Que la obra pública en particular es de las actividades que resultan prioritarias para la consecución de tales objetivos, ya que la administración pública en la actualidad, exige de una eficiencia y claridad en los procedimientos en los que estén incluidos los particulares y en los que se beneficie a la sociedad en general.

Que el ordenamiento que actualmente regula los procedimientos conforme a los cuales se determinan a las personas ya sean físicas o morales, que habrán de encargarse de la obra pública, padece de múltiples vacíos que conllevan muchas veces problemas de interpretación y aplicación, que más que estar regulados están basados en la costumbre pero sin estar al rango de norma.

Que en el Título Primero, Capítulo Único de Disposiciones Generales en el artículo primero se incluyen a las personas que quedarán sujetas a este ordenamiento. Unas de ellas es la señalada en la fracción sexta del mencionado artículo y que se refiere a los particulares que realicen obra pública con fondos públicos; lo anterior obedece a que estos, por el simple hecho de depender de tales fondos se consideró necesario sujetar su actuar a las disposiciones de esta ley, garantizando con ello una claridad y seguridad que cualquier acción u omisión que perjudique la economía y los recursos del Estado no quede en ningún momento impune ante la sociedad. Asimismo, los señalados en la fracción VII del mismo artículo también quedan sujetos a este ordenamiento en razón de que en la práctica, estos órganos e instituciones requieren de infraestructura propia para su buen funcionamiento, ello conlleva a que el Gobierno del Estado, específicamente el Ejecutivo, se enfrente a la necesidad de destinar fondos públicos para la construcción de los bienes inmuebles adecuados, satisfaciendo así las metas propuestas.

Que bajo este tópico, la redacción del artículo segundo se hace con un sentido más general y menos limitativo como lo era el anterior numeral, abarcando así cualquier actividad que se relacione con la obra pública, siempre y cuando se realice ya sea total o parcialmente con cargos a los fondos estatales o municipales.

Que en el artículo 12 se establece el principio de equidad e igualdad de preferencias en beneficio de los contratistas con el objeto de evitar la parcialidad ante la toma de decisiones, siempre y cuando estas encuadren en los supuestos que incluye.

Que el artículo 13, no descarta la posibilidad de presentarse el caso en el que la obra pública, en razón de su naturaleza, esté afectada por los límites territoriales de los estados vecinos o Municipios que, para este supuesto, se prevé la facultad de convenir con los implicados las formas y responsabilidades a que ellos estarán sujetos durante la realización de la obra.

Que en el apartado de la planeación, programación y presupuestación de las obras, se introducen como aspectos importantes, el hecho de que los Municipios remitan sus programas de obra pública a la dependencia encargada de la Planeación y Finanzas, con la intención de verificar de que estos estén en congruencia con los planes estatales de desarrollo, pero siempre y cuando se advierta la presencia de fondos estatales o federales; ello obedece al hecho de que en caso contrario, no tendría sentido tal exigencia, pues se violaría sistemáticamente la autonomía municipal.

Que otro aspecto relevante a considerar, consiste en que en este mismo apartado se hace una introducción a las consideraciones más importantes que se deberán tomar en cuenta para la realización de la obra pública por administración, que son los referidos básicamente a la capacidad financiera y técnica con que cuente la dependencia, entidad o municipio de que se trate. Asimismo, como último elemento relevante en este capítulo atañe a lo establecido en el artículo 19 del presente ordenamiento y que se refiere al hecho de que ya no se remitirán los presupuestos para la obra pública para su análisis y aprobación por parte del órgano encargado de la Planeación y Finanzas, sino que ahora sólo se hace referencia a la inclusión en el presupuesto de egresos, pues se entiende que si tal expediente ya fue elaborado, previamente tuvieron que ser aprobados, pues de otra manera no tendría razón de ser esta disposición.

Que en lo referente al padrón de contratistas, se resaltan algunas innovaciones que consideramos importantes: primero, la dependencia que ahora tendrá a su cargo el padrón de contratistas será la Secretaría de la Contraloría y no la Secretaría de Planeación y Finanzas que lo hacía a través de la Coordinación de Planeación, pues, conforme a las facultades que le otorga la Ley de la Administración Pública Estatal, aquella dependencia sería la adecuada para tener a su cargo dicho padrón. Además, se establece la obligatoriedad para esta autoridad de realizar las publicaciones del padrón de manera anual en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado, con la finalidad de hacer del conocimiento público quiénes integran este padrón y no mantenerlo de manera reservada.

Que se continúa haciendo la distinción entre suspender y cancelar el registro de los contratistas. En el primero se agregan algunas otras disposiciones referentes a la calidad de deudor en que incurra el contratista pero que además esté sujeto al procedimiento de suspensión de pagos, así como otro tipo de conductas que contravengan a la obra pública, pero que estas estén debidamente comprobadas por la Secretaría de la Contraloría como unidad administrativa interesada en el buen desempeño de los contratistas. La calidad de deudor y la sujeción a procedimiento de suspensión de pagos se toma en consideración pues es obvio que un contratista en tales circunstancias en ningún momento podría garantizar certidumbre y solvencia en su desempeño. En el segundo, se contemplan dos conductas más, una relacionada con la voluntad propia del contratista de que le sea cancelado su registro. Las fracciones IV y V del artículo 24 prevén, la primera, la conducta dolosa y de mala fe por parte

del contratista durante el concurso de adjudicación o dentro del proceso de ejecución de la Obra. La fracción V del citado artículo prevé la figura de la reincidencia del contratista en cuanto a la rescisión administrativa de un contrato de obra, pues, se considera que estas reincidencias y sus antecedentes negativos, pueden servir como medida para cancelar el registro al contratista en virtud de que tales antecedentes constituyen una evidencia de la nula confianza y seguridad que deposita la contratante en el contratista.

Que en el capítulo segundo, se innova la creación del Comité de Selección de Contratistas cuya función principal es la de llevar a cabo el proceso de selección de candidatos a realizar obra pública pero bajo la modalidad de invitación restringida y otros procedimientos que a lo largo de la ley se mencionan. La creación de este órgano colegiado obedece a la necesidad de que estos procesos sean llevados con la mayor claridad posible a fin de que se garantice la imparcialidad y el sano criterio de las personas involucradas en este proceso. La forma en que se integra este comité intenta representar a todos y cada uno de los interesados que directa o indirectamente estén inmiscuidos en la realización de la obra. Se obliga, asimismo, a que cualquier decisión, acto o resolución que emita este órgano esté debidamente fundado y motivado para evitar cualquier violación a las garantías de los gobernados por parte de aquel.

Que se agrega el capítulo tercero con la finalidad de establecer en forma clara, cuáles habrán de ser las causas que impidan a las contratantes a recibir propuesta alguna. Como se observa en el artículo 27 del presente ordenamiento, se desarrolla su contenido de manera más casuístico con el objeto de encuadrar las conductas posibles que puedan presentarse por parte de los contratistas.

Que en el capítulo de la Fases para la realización de la Obra, se establecen de manera clara y sistemática las fases de la obra pública, todas y cada una de ellas tiene el objeto de contemplar las medidas mínimas que toda obra requiere y a garantizar con ello el cabal y buen cumplimiento de las mismas, obligándose con ello a que el contratista bajo ninguna circunstancia dejará de cumplir con el orden que se establece en el artículo 28 de la presente ley.

Que con el criterio de fortalecer la planta productiva local en la industria de la construcción, se establecen los montos que sirven como parámetro para la determinación de cuál será la modalidad bajo la cual se asignará la obra pública. En este rubro están consideradas la adjudicación directa, la invitación restringida y la licitación pública. Los montos de cada una de ellas están basados en las consideraciones que sobre el presupuesto y la magnitud de la obra que se pudiese realizar con las cantidades que implican los porcentajes descritos en el artículo 31 de esta ley. El requisito común que entre todas las modalidades descritas se mencionan, es el relacionado con la capacidad financiera y técnica de los contratistas además de los mencionados en los artículos respectivos.

Que como aspecto destacable se contempla durante el acto de presentación y apertura de proposiciones la ejecución de dos etapas, mismas que están basadas en el tipo de documentos que se toman como base para la asignación. En la primera etapa, se contempla el aspecto técnico de lo que integra todo el proceso y en la segunda etapa, comprende lo relacionado con el aspecto económico que implica la obra pública.

Que con el afán de garantizar un proceso de selección claro y equitativo, se exige la realización del procedimiento para el acto de apertura de proposiciones, el artículo 46 en su fracción II indica que la convocante invitará a participar a un representante del órgano de

control que corresponda, uno de la dependencia encargada de la planeación y finanzas, uno de la dependencia normativa, así como a un representante de la sociedad civil en los términos que establezca el reglamento.

Que el último aspecto relevante, en este capítulo, está contenido en el artículo 48 de la presente ley, y se refiere a la mecánica de la revisión detallada de las propuestas técnicas y económicas así como los criterios de valoración y adjudicación de la obra, en donde se le permite a la convocante eliminar a los que conforme a su criterio no estén en concordancia con los rendimientos que comúnmente se aceptan en los tratados de análisis de precios unitarios, los costos y precios de maquinaria y equipo referidos al procedimiento constructivo correspondiente presentado por los licitantes en sus propuestas específicas y que por ello pongan en riesgo la calidad de la obra. Esto, obedece básicamente al interés que se tiene en evitar la competencia desleal y otras prácticas que por la obviedad de las propuestas tiendan a provocar un perjuicio tanto al gremio de contratistas como a la propia administración particularmente a la dependencia en donde se ventila este procedimiento. Por ello, al mismo tiempo se exige que la convocante emita una resolución fundada y motivada para evitar cualquier violación al presente ordenamiento, así como a los derechos fundamentales y que la autoridad convocante actúe dentro del marco de la legalidad.

Que la contratación se determina en el capítulo sexto, y tiene como aspecto trascendental la obligatoriedad de celebrar contrato dentro del plazo de diez días hábiles siguientes a la fecha en que se resolvió el procedimiento de licitación, contemplando el caso en que no firme el interesado; en tal supuesto se faculta a la convocante adjudicar el contrato al participante siguiente de acuerdo al orden de prelación que se emitió en el fallo correspondiente, pero con la limitante de que la diferencia de precio entre el que se negó a firmar y el del adjudicado no sea mayor del diez por ciento, monto que se considera justo y equiparable, ya que de lo contrario se rebasaría lo contemplado como egreso provocando un desajuste en lo presupuestado.

Que en el capítulo primero del título cuarto de este apartado, se abraza todo lo relacionado con la ejecución de la obra, estableciendo como aspecto trascendental los casos de suspensión de la obra por causa justificada, de fuerza mayor o caso fortuito. Los casos en que exista la necesidad de hacer estimaciones y las formas para que procedan. Las reglas para la suspensión de la obra pública están establecidas de manera clara en el artículo 61 y se prevén los casos en que esta sea por causas imputables a la contratista o a la contratante. Los casos de desajuste económico también están establecidos en este capítulo y contempla la posibilidad de poder hacer reajustes en los costos de los trabajos aun no ejecutados conforme el programa pactado, esto con la finalidad de no afectar la continuidad de la obra y la pronta materialización de los programas dentro de un margen considerable y que permita a la contratante evitar nuevos procedimientos o suspensión de los trabajos por causas ajenas tanto al contratante como al contratista.

Que en el capítulo segundo del Título Cuarto, se contempla la etapa de terminación y recepción de los trabajos. En la primera etapa se establece la obligación del contratista de dar aviso por escrito a la contratante de la terminación de la obra. Asimismo, y con el propósito de evitar daños a la obra que pueden repercutir en perjuicio del contratista se prevé el caso en que la contratante se negare a recibirla, para lo cual se faculta al contratista a hacer entrega de la obra al órgano de control correspondiente, eximiéndolo de esta manera de realizar cualquier gasto que por concepto de custodia y cuidado de los trabajos se tuvieron que erogar.

Que en el Título Quinto capítulo único, se establecen todas las disposiciones relacionadas con la ejecución de la obra por administración directa. Así, con el propósito de fomentar la participación de la iniciativa privada, la creación de fuentes de empleo y un mayor circulante, entre otros, se establece como condición indispensable el que la dependencia, entidad o ayuntamiento interesada en realizar obra pública bajo esta modalidad, cuente con el total de los recursos técnicos y financieros necesarios, para que no haya duda del buen éxito y la calidad de la obra que ejecutasen. Asimismo, se prevé la figura del comité de compras cuya función más importante es la de llevar a cabo el proceso de adquisición de los materiales e insumos que se requieran para la ejecución de la obra con el propósito de evitar la carga de trabajo y los procesos burocráticos que, de acuerdo y conforme a los procedimientos que la ley correspondiente establece, retardan y complican el ritmo con el que muchas veces las obras deberían avanzar. De esta manera, se deja abierta la posibilidad de reglamentar y completar la conformación de dicho comité en el reglamento correspondiente.

Que toda la información que se requiera sobre los actos y contratos referidos en esta ley y que tengan que ver con la obra pública está regulada en el título sexto, con la especificación de que tal documentación se reservará por el lapso de tres años, tiempo que se considera prudente y necesario para que la autoridad resguarde dicha documentación. Asimismo, la calidad de la obra es un aspecto relevante e imprescindible para el buen funcionamiento y de éstas, así como para la garantía de contar con obras que vayan acordes con las exigencias de la sociedad. Pero no basta con exigir el aspecto cualitativo sino que es necesario que este sea verificable y comprobable. Motivo por el cual se establecen en el artículo 74 de esta ley la posibilidad de llevar a cabo tal comprobación a través de los laboratorios debidamente certificados y aceptados por la contratante, garantizando con esto también, un clima de seguridad y confianza no solo para con el Gobierno del Estado, sino también para con la sociedad misma que es la principal beneficiada con la creación de obras con calidad certificada.

Que las medidas correctivas por parte del contratante, consideradas en el Título Séptimo, son básicamente la infracción y la sanción. La primera está contemplada de acuerdo con un monto deliberado y considerado como suficiente para resarcir posibles daños y perjuicios según la gravedad de la infracción. Dentro de las sanciones se contempla la inhabilitación al licitante que encuadre en el supuesto que contempla el artículo 76; el tiempo que se permite inhabilitar se considera suficiente como medida por parte de la contratante para reprimir cualquier conducta que vaya en perjuicio del buen desempeño de la administración.

Que se establece el recurso de revocación en el Título Octavo, con el que los interesados pueden hacerse escuchar ante la autoridad y al mismo tiempo se permite solicitar la suspensión del proceso de adjudicación de la obra, así como el monto con el que debe garantizar y dejar como fianza la persona que solicite la suspensión, además de contemplar aquí mismo la posibilidad de sancionar en caso de no lograr la acreditación por parte del inconformante. Asimismo y con la finalidad de evitar que se tenga como simple propósito el entorpecer el buen funcionamiento y la marcha de los trabajos, se hace exigible una garantía por parte del inconformante cuyo monto no será inferior al diez por ciento ni superior al cincuenta por ciento del valor total de la obra. En caso de que resulte improcedente, esta cantidad se hará efectiva a favor de la dependencia. También se prevé la posibilidad de que se presente inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo.

Por lo anterior, este Poder Legislativo, expide la siguiente:

"LEY DE OBRA PÚBLICA DEL ESTADO DE QUERETARO"

TÍTULO PRIMERO

DISPOSICIONES GENERALES

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 1.- La presente ley es de orden público e interés social y tiene por objeto regular el gasto que en materia de la obra pública realicen los gobiernos del Estado y de los Municipios, cualquier organismo de la administración pública estatal, los fideicomisos o aquellos particulares que con recursos públicos del Estado o de los Municipios ejecuten obras tipificadas como públicas, así como todas las actividades relativas a la planeación, programación, proyecto, presupuestación, contratación, ejecución, verificación y control, operación, mantenimiento y demolición de la obra pública.

Quedan sujetas a esta ley:

- I. Las secretarías y las unidades administrativas del Poder Ejecutivo del Estado.
- II. Los poderes, Legislativo y Judicial.
- III. Los organismos auxiliares, paraestatales y descentralizados del Estado y de los Municipios.
- IV. Los fideicomisos del Estado y los de los Municipios.
- V. Los Municipios del estado.
- VI. Los particulares que con fondos públicos ejecuten obra pública.
- VII. Los órganos constitucionales autónomos.
- VIII Las instituciones con funciones educativas, de impartición de justicia, de investigaciones sociales, políticas o económicas o de naturaleza semejante que reciban fondos públicos estatales o municipales para su funcionamiento.

A los mencionados en la fracción I se les denomina en el cuerpo de esta ley, dependencias; a los señalados en las fracciones II, III, IV, VII Y VIII se les denomina entidades, a los señalados en la fracción V Municipios; y a los señalados en la fracción VI particulares.

ARTÍCULO 2.- Para los efectos de esta ley se considera obra pública a todo aquel trabajo relacionado con ésta y que se realice con fondos públicos estatales o municipales.

- I. La construcción, instalación, conservación, mantenimiento, reparación y demolición de los bienes inmuebles.

II. Los servicios relacionados con la misma, incluidos los trabajos que tengan por objeto: concebir, diseñar, proyectar y calcular los elementos que integren un proyecto de obra pública, así como los relativos a la investigación, asesorías y consultorías, la dirección y supervisión de la ejecución de las obras, los estudios que tengan por objeto rehabilitar, corregir o incrementar las eficiencias de las instalaciones y los trabajos de exploración, conservación, rescate y desarrollo de los recursos naturales que se encuentren adheridos al suelo o inmersos en el subsuelo.

III. Los proyectos integrales que comprendan desde el diseño de la obra hasta su cabal terminación.

IV. Los trabajos de infraestructura urbana o agropecuaria.

V. Cualquier trabajo relativo a las áreas abiertas, vialidades, mobiliario y equipamiento urbano.

VI. Las actividades relacionadas con la obra pública que se desarrollen por encargo de las dependencias, entidades o municipios.

VII. Todos aquellos de naturaleza análoga.

ARTÍCULO 3.- La inversión en obra pública se sujetará a lo previsto en la normatividad que regula al gasto público, al ejercicio de los presupuestos de egresos del Estado y los Municipios, así como en lo previsto en la ley de la materia y demás disposiciones aplicables.

ARTÍCULO 4.- La aplicación de la presente ley corresponde al Ejecutivo del Estado a través de las dependencias competentes en las materias de Planeación y Finanzas, Desarrollo Urbano, Obras Públicas, Fiscalización y Control, y a los Municipios, en el ámbito de su competencia que les corresponda, sin perjuicio de la intervención que corresponda a otras dependencias estatales o municipales, conforme con ésta u otras disposiciones legales.

Las Secretarías de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, de Planeación y Finanzas, y de la Contraloría conjuntamente, y en su caso, con los Municipios, expedirán las disposiciones administrativas necesarias, que para la aplicación de la presente ley deberán observarse en la contratación, ejecución y supervisión de la obra pública, mismas que deberán publicarse en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado La Sombra de Arteaga.

Cuando se autorice la ejecución de obra pública o actividad alguna de las señaladas en el párrafo primero, del artículo 1º, en beneficio de los mencionados en la fracción VII del mismo numeral, serán las mismas autoridades señaladas en este artículo quienes se encargarán de vigilar el desarrollo y ejecución de las obras y actividades mencionadas cuando se realicen por administración, así como de la contratación cuando sea necesario, cuya formalización la hará la autoridad competente en términos de la ley.

ARTÍCULO 5.- Estarán sujetas a las disposiciones de esta ley, toda obra pública que contrate el Estado y los Municipios; asimismo, cualquier actividad relacionada con la obra pública que aquellas contraten y se realicen con cargo total o parcial a:

I. Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebre el Ejecutivo Estatal con la participación que en su caso corresponda a los Municipios.

II. Los fondos estatales, conforme a los convenios que celebren el Ejecutivo Estatal, con la participación que en su caso correspondan a los organismos no gubernamentales o a los particulares por sí mismos.

III. Los fondos municipales.

ARTÍCULO 6.- La ejecución de la obra pública que realicen las dependencias, entidades, Municipios y particulares con cargo total o parcial a fondos acordados por la Federación, conforme a los convenios entre los Ejecutivos Federal y Estatal, estarán sujetas, adicionalmente a las disposiciones de lo ordenado por la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la misma, Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios del Estado, su reglamento y a lo pactado en los convenios descritos en el artículo anterior.

ARTÍCULO 7.- Corresponde a las dependencias, entidades y Municipios ejecutar la obra pública del Gobierno del Estado y de los Municipios, respectivamente, las que deberán realizarse por contrato o por administración con las excepciones que marca esta ley.

ARTÍCULO 8.- Cuando por las condiciones especiales de la obra pública se requiera la intervención de dos o más dependencias, entidades o Municipios, quedarán a cargo de cada una de ellas, la responsabilidad sobre la adecuada ejecución de la parte de la obra que le corresponda, sin perjuicio de la responsabilidad que, en razón de sus atribuciones, tenga la dependencia encargada de la planeación y programación de aquella. Previamente a la ejecución de la obra a que se refiere este artículo, se deberán suscribir, los términos y las condiciones para la coordinación de las acciones de las dependencias, entidades o los Municipios que intervengan así como los convenios correspondientes.

ARTÍCULO 9.- El Ejecutivo del Estado a través de las Secretarías de la Contraloría, de Desarrollo Urbano y Obras Públicas, Planeación y Finanzas y de Desarrollo Sustentable, así como los Municipios, de acuerdo a sus atribuciones, dictarán las disposiciones conforme a las cuales, las dependencias, entidades y Municipios vigilarán las acciones relacionadas con la obra pública y comprobarán sus resultados.

ARTÍCULO 10.- Las dependencias, entidades y Municipios, por conducto de los órganos competentes, anualmente formularán un inventario de la maquinaria y equipo de construcción a su custodia o de su propiedad, indicando las condiciones de operación del mismo y lo mantendrán actualizado.

ARTÍCULO 11.- Los actos, contratos y convenios que las dependencias, entidades o Municipios realicen en contravención a lo dispuesto por esta ley, serán nulos.

ARTÍCULO 12.- En los contratos y servicios de obra pública que regula la presente ley, se preferirá en igualdad de condiciones y circunstancias a los contratistas, ya sean personas físicas o morales, con domicilio fiscal, operación y arraigo en el Estado, quienes deberán acreditar además lo siguiente:

I. Poseer una experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la actividad a desarrollar en el Estado de Querétaro la que podrá ser avalada por clientes de dos años anteriores y tener establecida en éste, con la misma antigüedad la administración principal de su actividad al momento de realizarse la invitación o convocatoria;

II. Contar con capacidad financiera, técnica y de respuesta inmediata para la ejecución de la obra; y

III. Estar inscritas en el Padrón de Contratistas al que se refiere el artículo 20 de esta ley.

ARTÍCULO 13.- Los contratos de obra pública a ejecutarse por las dependencias, entidades o Municipios en las que la obra pública y en razón de la naturaleza misma de ésta, se encuentre afectada por los límites territoriales de los estados vecinos o Municipios, se regirán por lo que convengan estos previamente a la ejecución de la obra y en lo conducente a lo dispuesto por esta ley, sin perjuicio de lo dispuesto en la legislación del sitio en donde se formalice el acto.

TÍTULO SEGUNDO

DE LA PLANEACIÓN, PROGRAMACIÓN Y PRESUPUESTACIÓN DE LAS OBRAS

CAPÍTULO ÚNICO

ARTÍCULO 14.- En la planeación, programación, proyecto y presupuestación de la obra pública las dependencias, entidades y Municipios, en lo que les compete, deberán:

I. Ajustarse a las políticas, objetivos y prioridades señaladas en los planes que establezca el gobierno del Estado en el ámbito estatal, sectorial y regional relativas al desarrollo urbano, rural, social y económico a corto, mediano y largo plazo de acuerdo con los recursos asignados a los mismos planes en observancia a las normas y lineamientos que de ellos deriven. Los Municipios adicionalmente, se ajustarán a los planes municipales.

II. Jerarquizarla en función de las necesidades del Estado y los Municipios así como del beneficio social económico y ambiental que represente.

III. Respetar las disposiciones legales.

IV. Prever los requerimientos de áreas y predios para la debida ejecución de la misma previa a la consulta con la Secretaria de Desarrollo Urbano y Obras Públicas para que ésta en ejercicio de sus atribuciones, determine su conveniencia y viabilidad. Asimismo, se deberán observar y respetar las declaratorias de provisiones, usos, reservas y destinos de áreas y predios que hubieren decretado conforme con lo dispuesto por las leyes de la materia.

V. Considerar las disposiciones de los recursos con relación a las necesidades y prioridades jerárquicas de las mismas.

VI. Prever las obras urgentes, las de infraestructura, las complementarias y las accesorias, así como las acciones necesarias para ponerlas en servicio, estableciendo las etapas que se requieran para su cabal terminación.

VII. Considerar y adoptar la tecnología aplicable en función de la naturaleza de las obras, la selección de materiales, productos, equipos y procedimientos constructivos con tecnología nacional preferentemente, que satisfagan los requerimientos técnicos y económicos del proyecto.

VIII. Tomar en cuenta el empleo preferente de los recursos humanos y la utilización de los materiales propios de la región donde se ubiquen las obras.

IX. Tomar en cuenta los efectos que sobre el medio ambiente pueda causar la ejecución de la obra, sobre la base de los estudios y las manifestaciones de impacto ambiental local o regional, previstos por la Ley Estatal del Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, así como en materia de ordenamiento territorial.

X. Considerar las condiciones indispensables para permitir el libre desplazamiento de las personas, así como las adecuaciones que requieran las personas con capacidades diferentes.

ARTÍCULO 15.- Las dependencias, entidades y Municipios elaborarán los programas anuales de obra pública y en particular de cada una de estas inversiones con sus respectivos expedientes técnicos y presupuestos, con base en las políticas, objetivos y prioridades de la planeación del desarrollo del Estado y sus Municipios, considerando:

I. La rentabilidad social, económica y ambiental con base en los estudios de factibilidad de la inversión que se requieran.

II. Los recursos necesarios para la etapa de ejecución, así como los gastos de operación del proyecto.

III. Las unidades responsables de su ejecución.

IV. La adquisición y regularización de la tenencia de la tierra en donde se realizará la obra pública, así como la obtención de los permisos y las autorizaciones.

V. Las características y las condiciones ambientales, climáticas y geomórficas de la región donde se realizará la obra pública, debiendo presentar un programa de restauración cuando se cause un impacto ambiental adverso.

VI. Los trabajos de manejo tanto preventivo como correctivo.

VII. Los trabajos e infraestructura y las complementarias que requiera la obra.

VIII. Las investigaciones, asesorías, consultorías y estudios indispensables, incluyendo las normas y especificaciones de construcción aplicables así como los proyectos arquitectónicos y de ingeniería necesarias.

IX. Las demás previsiones que deberán tomarse en consideración según la naturaleza y características de la obra.

X. Los programas de obra pública indicarán las fechas previstas para la iniciación y terminación de todas sus fases, considerando todas las acciones previas a su ejecución.

ARTÍCULO 16.- Las dependencias y las entidades remitirán sus programas de obra pública a la Secretaría de Planeación y Finanzas en las fechas establecidas por esta y en estricto apego a lo estipulado en la Ley para el Manejo de los Recursos Públicos, para que en su caso puedan ser consideradas en el presupuesto de egresos del estado.

Cuando participen fondos estatales o federales, los Municipios remitirán sus programas de obra pública, a la Secretaría de Planeación y Finanzas para la verificación de su congruencia con el Plan Estatal de Desarrollo.

ARTÍCULO 17.- Las dependencias, entidades y Municipios que requieran contratar o realizar estudios y proyectos, deberán verificar en sus archivos la existencia de estos. En el caso de que estos estudios y proyectos existan y de comprobarse que los mismos satisfacen los requerimientos de la entidad, dependencia o Municipios, no procederá la contratación.

En caso de que no existan los estudios y proyectos, se contratarán los mismos, apegándose a la contratación de estos servicios, a lo estipulado en la presente ley.

ARTÍCULO 18.- Las dependencias, entidades y Municipios dentro de sus programas, elaborarán los presupuestos de cada una de las obras públicas que pretendan realizar, distinguiendo las que deberán ser por contrato o por administración.

ARTÍCULO 19.- Los presupuestos para la obra pública y su calendarización física y financiera una vez elaborados, serán remitidos a la dependencia encargada de la Planeación y las Finanzas correspondiente para que sea incluido en el respectivo presupuesto de egresos.

Los expedientes técnicos de las obras y sus respectivos presupuestos, previamente validados por las dependencias normativas, deberán remitirse por parte de las dependencias, entidades y Municipios a la dependencia encargada de la Planeación y las Finanzas que corresponda, para su análisis y aprobación, apegándose a la normatividad establecida según sea el caso. Una vez hecho lo anterior, dichos documentos se devolverán a la dependencia, entidad o municipio.

TÍTULO TERCERO

DEL PROCESO PARA LA CONTRATACIÓN Y REALIZACIÓN DE LA OBRA PÚBLICA.

CAPÍTULO I

DEL PADRÓN DE CONTRATISTAS

ARTÍCULO 20.- La Secretaría de la Contraloría tendrá a su cargo el Padrón de Contratistas de obra pública del Estado de Querétaro, clasificando según su especialidad, capacidad económica y técnicas a las personas físicas o morales. En el caso de la obra que se ejecute con recursos provenientes de los Municipios, los Municipios podrán tener en particular su propio padrón de contratistas, en caso de no contar con el, se referirán al padrón de contratistas de la Secretaría de La Contraloría de Gobierno del Estado.

La Secretaría de la Contraloría hará del conocimiento de las dependencias, entidades, Municipios y al público en general, de las personas registradas en el padrón; esta información será publicada en forma bimestral en las oficinas de dicha secretaría, y de manera anual en el periódico oficial de gobierno del Estado La Sombra de Arteaga, debidamente actualizada, en los primeros treinta días del año que corresponda. De la misma manera, los Municipios que cuenten con este, deberán hacer público su padrón de contratistas en las oficinas de la dependencia encargada de la ejecución de las obras públicas en forma bimestral y publicarlos en el periódico oficial del Gobierno del Estado La Sombra de Arteaga y en sus gacetas municipales en los primeros treinta días del año que corresponda.

Sólo podrán celebrar contratos de obra pública o de servicios relacionados con la misma, las personas con registro vigente en el padrón.

La clasificación por especialidad requerida, a que se refiere el primer párrafo de este artículo, deberá ser considerada en la convocatoria y en la contratación de la obra pública.

ARTÍCULO 21.- Las personas interesadas en registrarse en el Padrón de Contratistas de Obra Pública en el Estado o de los Municipios, deberán solicitarlo por escrito ante la dependencia u órgano de control interno que corresponda, cumpliendo con los requisitos que para tal efecto establezca la Secretaría de la Contraloría.

La vigencia del registro en el Padrón será anual, del 1 de julio al 30 de junio del siguiente año.

ARTÍCULO 22.- La Secretaría de la Contraloría o en su caso el órgano de control interno de cada municipio, resolverá sobre el registro o la renovación en el Padrón de Contratistas de Obra Pública dentro de un término que no exceda de diez días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la solicitud.

Si transcurrido este plazo, no se ha dado respuesta al contratista, se considerará procedente el registro o la renovación del mismo.

ARTÍCULO 23.- La Secretaría de la Contraloría, o en su caso el órgano de control interno de cada municipio, podrá suspender temporalmente el registro de los contratistas cuando:

- I. El Contratista sea declarado por la autoridad competente, como incapacitado legalmente para contratar.
- II. El Contratista esté sujeto a un procedimiento de suspensión de pagos. Cuando cualquier tipo de autoridad conozca de este procedimiento, deberá

notificarlo a la Secretaría de la Contraloría o al órgano de control interno de cada municipio.

III. El Contratista incurra en actos contrarios u omisiones relacionadas con la obra pública, que le sean imputables y estén debidamente comprobados por la Secretaría de la Contraloría u órgano de control interno de cada municipio.

IV. El Contratista incurra en cualquiera otra causa que por su gravedad sea análoga a las contenidas en las fracciones anteriores, fehacientemente afecten a los intereses de la contratante o que en su caso por disposición de la ley sean necesarias.

Cuando el Contratista acredite la desaparición de la causa que originó la suspensión temporal del registro, la Secretaría de la Contraloría o en su caso el órgano de control interno de cada municipio, podrá levantar dicha restricción en la vigencia del registro del interesado. Apercibiéndolo que en caso de reincidencia, será suspendido definitivamente.

ARTÍCULO 24.- La Secretaría de la Contraloría o en su caso el órgano de control interno de cada municipio, deberán cancelar el registro del contratista cuando:

I. Se le declare en estado de quiebra, o en su caso sujeto a concurso de acreedores

II. Incurra en cualquier acto u omisión grave, relativo a la obra pública, que le sea imputable y que perjudique los intereses del contratante, debidamente sustentado y demostrado.

III. La información que haya proporcionado para la obtención de su registro o renovación sea falsa.

IV. El Contratista hubiere actuado con dolo o mala fe en el concurso de adjudicación de la obra pública o en el proceso de ejecución de la misma.

V. Al Contratista se le haya rescindido administrativamente en más de una ocasión un contrato de obra, dentro de un lapso de dos años calendarios contados a partir de la fecha de la primera rescisión.

VI. Haya celebrado contratos en contravención con lo dispuesto en esta ley.

VII. A solicitud del contratista.

En el caso de que proceda la cancelación del registro en el Padrón de Contratistas, la Secretaría de la Contraloría o en su caso los órganos de control interno de los Municipios, lo publicará en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga.

CAPÍTULO II

DEL COMITÉ DE SELECCIÓN DE CONTRATISTAS.

ARTÍCULO 25.- El Comité de Selección de Contratistas es el órgano encargado de llevar a cabo el proceso de selección de los candidatos a realizar obra pública bajo la modalidad de invitación restringida y estará integrado por:

- a) Un representante de la dependencia, entidad o municipio ejecutor, con derecho a voz y a emitir propuesta de candidatos.
- b) Un representante del órgano de control, con derecho a voz.
- c) Un representante de la dependencia encargada de la Planeación y Finanzas, o el encargado de las finanzas públicas municipales con derecho a voz y a emitir propuesta de candidatos.
- d) Un representante de la organización formal de la Industria de la construcción.
- e) Un representante de la organización formal de los servicios de consultoría.
- f) Un representante de los colegios de profesionistas de la localidad que estén relacionados con la obra pública.
- g) Un representante del Sistema Estatal o Municipal de los Consejos de Concertación Ciudadana, con derecho a voz.
- h) Un representante de la dependencia normativa del tipo de obra de que se trate, con derecho a voz.

En lo que se refiere a los incisos d), e) y f), se les convocará dependiendo del tipo de obra o contrato y según la especialidad de que se trate, los que tendrán derecho a voz y a emitir propuesta de candidatos.

ARTÍCULO 26.- En el caso de los concursos de obra pública bajo la modalidad de invitación restringida a cuando menos tres contratistas, los participantes deberán ser previamente propuestos por el Comité de Selección de Contratistas, de acuerdo al siguiente procedimiento:

1. Para poder participar como candidato en el Comité de Selección para los concursos bajo esta modalidad, los interesados deberán estar inscritos en el Padrón de Contratistas del Gobierno del Estado de Querétaro, a cargo de la Secretaría de la Contraloría del Estado o en los padrones de contratistas de cada municipio y se trate exclusivamente de obras a ejecutarse con recursos propios del municipio, en los cuales no intervengan recursos estatales ni federales. Los registros deberán ser vigentes. Si no se contara con padrón de contratistas en el Municipio de que se trate, se atenderá al de la Secretaría de la Contraloría del Estado.

2. Cuando exista la necesidad de obras que requieran ser concursadas por invitación restringida a cuando menos tres contratistas, la dependencia, entidad o municipio interesado, deberá dirigirse por escrito a la Secretaría de la Contraloría u órgano de control interno respectivo, para que convoque a la reunión del Comité de Selección, indicándole las características de aquellas, el origen de los recursos por invertir, la aprobación de los mismos, el presupuesto y el calendario de ejecución. Una vez cubierto lo anterior, la Secretaría de la Contraloría procederá a la citación del Comité a que se refiere esta fracción, señalando el lugar, la fecha y la hora para su desahogo a fin de proceder a la selección.

3. El Comité de Selección de Contratistas, con base en los inscritos en el padrón respectivo, seleccionará a aquellos cuya capacidad técnica y financiera se adecue a las características de la obra pública por ejecutar, tomando en consideración además, la experiencia y la especialidad requeridas, procurando diversificar dicha selección, para evitar el acaparamiento de las obras a favor de uno o mas contratistas.

4. Por cada una de las obras que fuesen a ejecutarse a cargo de las dependencias, entidades o Municipios,

5. y que deban ser concursadas por invitación restringida, el Comité de Selección elegirá a tres o más contratistas dependiendo el monto de que se trate.

6. Una vez seleccionados los candidatos a invitación, el comité a través de la Secretaría de la Contraloría, elaborará el acta respectiva que plasme lo acordado, misma que será suscrita por los participantes y se entregará copia del documento a cada uno de ellos.

7. Con base en el contenido de la fracción anterior, la dependencia, entidad o ayuntamiento, en un plazo no mayor a 5 días naturales previo al evento de apertura de propuestas procederá a invitar a los contratistas seleccionados, recabando el acuse de recibo correspondiente.

Todo acto o resolución que realice el Comité de Selección deberá estar debidamente fundado y motivado.

CAPÍTULO III

DE LOS IMPEDIMENTOS

PARA LA CONTRATACIÓN

ARTÍCULO 27.- Las dependencias, entidades y los Municipios se abstendrán de recibir propuestas o celebrar contrato alguno en la materia a que se refiere esta ley, con contratistas, ya sean personas físicas o morales, cuando:

I. El contratista y el servidor público que intervenga directamente en la adjudicación del contrato, tengan intereses personales, familiares o de negocios, incluidos aquellos de los que se puedan obtener beneficios propios o a través de su cónyuge o sus parientes por afinidad hasta el segundo grado y consanguínea hasta el cuarto grado o para terceros con los que tenga relaciones profesionales, laborales o de negocios o beneficien a sociedades en las que el servidor público o las personas antes referidas formen o hayan formado parte, hasta con un año de antelación.

II. Aquellos contratistas o proveedores, a los que la dependencia, entidad o municipio les haya rescindido dos o más contratos de los referidos en esta ley por causas imputables a ellos, en un lapso de dos años naturales contados a partir de la primera rescisión. Dicho impedimento prevalecerá ante la propia dependencia, entidad o municipio convocante durante dos años calendario contados a partir de la fecha de rescisión del último contrato.

III. Los contratistas que por causas imputables a ellos mismos, se encuentren en situación de atraso grave y manifiesto en alguna o algunas obras públicas en contratos vigentes y que como consecuencia de ello, haya sido perjudicada la dependencia, entidad o ayuntamiento contratante.

IV. Los contratistas que hubieren proporcionado información falsa o que hayan actuado con dolo o mala fe en algún procedimiento de licitación o celebración de contrato para la adjudicación de obra pública establecidos en la presente ley.

V. Aquellos contratistas que hayan celebrado contratos en contravención a lo dispuesto por esta ley.

VI. Aquellos contratistas que hayan sido declarados por la autoridad judicial competente, en estado de quiebra, suspensión de pagos o en su caso, sujetos a concurso de acreedores.

VII. Aquellos contratistas que realicen, hayan realizado o vayan a realizar por sí o a través de empresas que formen parte del mismo grupo empresarial, trabajos, estudios, proyectos, coordinación, supervisión y control de obra e instalaciones, laboratorios de análisis y control de calidad, laboratorio de mecánica de suelos y de resistencia de materiales y radiografías industriales, preparación de especificaciones de construcción presupuesto o la elaboración de cualquier otro documento para la licitación de las adjudicaciones del contrato de la misma obra.

VIII. Aquellos contratistas que por sí o a través de empresas del mismo grupo empresarial, participen en un mismo concurso o elaboren dictámenes, peritajes y avalúos, cuando se requiera dirimir controversias entre tales personas y la institución, con relación a la misma obra.

IX. Las personas que desempeñen un empleo, cargo o comisión en el servicio público, o bien, las sociedades de las que dichas personas formen parte.

X. Las demás que por cualquier causa se encuentren impedidas para ello por disposiciones de ley.

El acto por el cual la dependencia, entidad o municipio califique alguna causa de incapacidad para contratar, deberá fundarlo y motivarlo conforme a derecho.

CAPÍTULO IV

FASES PARA LA REALIZACIÓN DE LA OBRA

ARTÍCULO 28.- Las fases de la obra pública son las siguientes:

- I. Estudios de factibilidad;
- II. Estudios y proyectos ejecutivos;
- III. Programa de ejecución de la obra;
- IV. Ejecución;
- V. Evaluación;
- VI. Entrega-recepción y;
- VII. Verificación

ARTÍCULO 29.- Para que se puedan realizar cualquiera de las fases a que se refiere el artículo anterior, es necesario que:

- I. Estén las obras incluidas en el Programa General de obra pública de Gobierno del Estado o en el correspondiente municipio.
- II. Se cuente con la aprobación del presupuesto de inversión.
- III. Se cuente con el proyecto ejecutivo, la información necesaria, normas y especificaciones de construcción, el presupuesto, el programa de ejecución y el programa de suministros, así como la disponibilidad material y legal del sitio en donde habrá de ejecutarse la obra.
- IV. Se satisfagan los requisitos relacionados con la obra, incluyendo los que deban cumplirse conforme con las disposiciones federales, estatales y municipales.

CAPÍTULO V

DE LAS DIVERSAS MODALIDADES

ARTÍCULO 30.- Para realizar la contratación de obra pública, las dependencias, entidades y Municipios se sujetarán a lo establecido en esta ley y conforme a las siguientes modalidades:

- I. Adjudicación directa
- II. Invitación restringida.
- III. Licitación pública

ARTÍCULO 31.- Para la ejecución de obra pública, así como de servicios relacionados con ésta a realizarse por contrato con cargo a fondos estatales o municipales, se utilizarán los siguientes criterios:

- I. Cuando el monto aprobado para la obra o servicios sea menor o igual a 0.002 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, el contrato respectivo se celebrará mediante adjudicación directa,
- II. Cuando el monto aprobado para la obra o servicios sea superior al 0.002 por ciento y menor o igual al 0.08 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, el contrato se celebrará mediante invitación restringida a cuando menos tres personas físicas o morales; y
- III. Cuando el monto aprobado de la obra sea superior al 0.08 por ciento del Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal vigente, el contrato se celebrará a través de licitación pública.

Los montos establecidos en las fracciones que anteceden, se calcularán sin el importe del impuesto al valor agregado.

Para determinar el monto de las obras conforme a este artículo, cada una se considerará individualmente y no podrá fraccionarse su importe total para ser comprendida en los supuestos de las fracciones que anteceden.

ARTÍCULO 32.- Cuando existan circunstancias extraordinarias o casos fortuitos o de fuerza mayor, no será aplicable lo dispuesto por el artículo 30 de la presente ley y las dependencias, entidades o Municipios, bajo su responsabilidad, podrán invitar a personas que cuenten con la capacidad de respuesta inmediata y los recursos técnicos, financieros y demás requisitos necesarios para el caso, previa resolución fundada y motivada por escrito que califique las razones y circunstancias que concurren, entendiéndose como casos de fuerza mayor entre otros: cuando el contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por tratarse de obras de arte, titularidad de patentes, derechos de autor y otros derechos exclusivos y cuando se hubiere rescindido el contrato respectivo por causas imputables al proveedor o contratista. En estos casos, la dependencia o entidad podrá adjudicar el contrato al licitante que haya presentado la siguiente proposición solvente más baja, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora no sea superior al 10% y como caso fortuito, entre otros: cuando peligre o se altere el orden social, la economía, los servicios públicos de salubridad, la seguridad o el ambiente de alguna zona o región del

estado, como consecuencia de desastres producidos por fenómenos naturales o existan circunstancias que puedan provocar pérdidas o costos adicionales importantes.

Las circunstancias extraordinarias a las que se refiere el párrafo anterior serán cuando:

I. A juicio de la Dependencia o Entidad ejecutoras y de común acuerdo con la Coordinación de Planeación y de los Ayuntamientos, en su caso, la obra sea de tal urgencia que deba iniciarse de inmediato y terminarse en un plazo perentorio y no se disponga del tiempo necesario para cumplir con los requisitos establecidos.

II. Atendiendo al importe total de la obra, no se justifique efectuar los gastos que tanto el convocante como los participantes tendrían que hacer para cumplir los requisitos establecidos.

III. Por las características particulares de la obra, se advierta que ésta requiere para su realización de financiamiento, experiencia y materiales, equipos o técnicas especiales, una vez que se ha comprobado que en el mercado no existe otra alternativa.

IV. El contrato sólo pueda celebrarse con una determinada persona por ser ésta el titular de la o las patentes necesarias para realizar las obras.

ARTÍCULO 33.- Las dependencias, entidades y Municipios, podrán ejecutar obra pública bajo la modalidad de adjudicación directa en la que se pedirán como mínimo tres presupuestos, adjudicándola al contratista que tenga mejor capacidad de respuesta inmediata, quienes además deberán cumplir con los siguientes requisitos:

I. Los recursos técnicos, financieros, además de una experiencia mínima de dos años en el ejercicio de la actividad empresarial en el estado de Querétaro.

II. Tener el contratista establecida en el Estado de Querétaro la administración principal de su actividad con una antigüedad mínima de dos años.

III. Que los contratistas cuenten con su registro actualizado en el Padrón de Contratistas en la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado o de los Municipios

IV. No se encuentren en los supuestos del Artículo 27.

ARTÍCULO 34.- En el procedimiento de invitación restringida, deberán observar las siguientes etapas:

I. Invitación a cuando menos tres contratistas.

II. Acreditación de los contratistas.

III. Entrega de bases.

IV. Presentación y apertura de proposiciones.

V. Adjudicación del contrato y ejecución de los trabajos.

ARTÍCULO 35.- Las dependencias, entidades y Municipios, podrán contratar obra pública bajo la modalidad de invitación restringida siempre y cuando se dé cumplimiento a los siguientes requisitos:

I. Que los contratistas invitados hayan sido elegidos previamente por el Comité de Selección convocado por la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado o por los Municipios

II. Que los contratistas elegidos cuenten al momento de la invitación, con su registro actualizado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado o de los Municipios.

III. Que los interesados que acepten participar, una vez que se conozca el catálogo de conceptos y se realice la visita al lugar donde se realizarán los trabajos, lo manifiesten por escrito.

ARTÍCULO 36.- Las dependencias, entidades y Municipios, contratarán obra pública mediante la modalidad de licitación pública.

ARTÍCULO 37.- En el procedimiento de licitación pública, se deberán observar las siguientes etapas:

I. Invitación por convocatoria abierta.

II. Acreditación de los contratistas.

III. Entrega de bases.

IV. Presentación y apertura de proposiciones.

V. Adjudicación del contrato y ejecución de los trabajos.

Dicha licitación se realizará invariablemente a través de la convocatoria que se publicará en uno de los periódicos de mayor circulación del estado así como en el Periódico Oficial de Gobierno del Estado. Adicionalmente podrá hacerse la publicación por medios electrónicos o aquellos de que disponga la entidad ejecutora.

ARTÍCULO 38.- El procedimiento de licitación pública se inicia con el lanzamiento de la convocatoria, la cual deberá publicarse según se establece en esta ley y deberá contener los siguientes requisitos:

I. El nombre de la dependencia, entidad o municipio convocante.

II. El origen de los recursos para realizar los trabajos.

III. La descripción general de la obra a licitar, así como el sitio en donde se llevarán al cabo los trabajos y en su caso con la indicación relativa de la posibilidad o no de hacer uso de la subcontratación parcial.

IV. Las fechas, horarios y lugar para inscripción, adquisición, costo y forma de pago de las bases, así como lo correspondiente a la presentación y apertura de proposiciones.

V. Fecha estimada de inicio y terminación de los trabajos.

VI. Información sobre los porcentajes a otorgar por concepto de anticipo, los cuales no serán inferiores al 30% ni excederán el 50%, así como la forma de pago de los trabajos.

VII. Capital contable solicitado y garantías generales solicitadas.

VIII. Los criterios generales conforme a los cuales se adjudicará el contrato.

IX. La experiencia, capacidad técnica y financiera que se requiera para participar en la licitación, de acuerdo con las características de la obra pública en cuestión.

X. Que los contratistas interesados cuenten con su registro actualizado en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado o de los Municipios.

XI. La relación de insumos que a juicio de la convocante sean prioritarios para la ejecución de la obra.

ARTÍCULO 39.- En la etapa de acreditación para la modalidad de invitación restringida, las dependencias, entidades y Municipios, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la recepción de los documentos que a continuación se señalan, resolverán si el interesado cumple o no con los requisitos exigidos para que pueda considerarse acreditado:

I. Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 27 de esta ley.

II. Carta de conocimiento de las características del sitio destinado para los trabajos, así como de aceptación para participar en la invitación y presentación de la propuesta formal.

En el caso de que el interesado sea acreditado, la dependencia, entidad o municipio, le entregarán la constancia de participación respectiva; en el supuesto que no satisfaga estos requisitos, deberá notificársele al interesado por escrito, fundamentando la razón de la negativa.

Si transcurridos los plazos a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, la convocante no emitiera notificación alguna, se considerara como acreditado al interesado.

ARTÍCULO 40.- Para la modalidad de licitación pública y en la etapa de acreditación, las dependencias, entidades y Municipios, dentro de los tres días hábiles siguientes al de la recepción de los documentos que a continuación se señalan, resolverán si el interesado cumple o no con los requisitos exigidos para que este pueda considerarse acreditado:

I. Acta constitutiva para personas morales; acta de nacimiento y registro federal de contribuyentes para las personas físicas

II. Declaración bajo protesta de decir verdad de no encontrarse en los supuestos del artículo 27 de esta ley.

III. Registro vigente en el Padrón de Contratistas de la Secretaría de la Contraloría de Gobierno del Estado o de los Municipios.

IV. Líneas comerciales de crédito.

V. Carta de conocimiento del inmueble destinado para los trabajos y las características del mismo.

VI. Carta de aceptación para participar en la licitación y presentación de la propuesta formal.

VII. Los demás solicitados expresamente en la convocatoria correspondiente.

En el caso de que el interesado sea acreditado, la dependencia, entidad o ayuntamiento entregará la constancia de participación respectiva; en el supuesto que no satisfaga los requisitos solicitados, deberá notificársele al interesado por escrito, fundamentando la razón de la negativa.

Si transcurridos los plazos a que hace referencia el primer párrafo de este artículo, la convocante no emitiera notificación alguna, se considerara como acreditado al interesado.

ARTÍCULO 41.- La entrega y el costo de bases para los casos en que aplique la modalidad de licitación pública, se realizará de conformidad a lo establecido en la convocatoria correspondiente.

ARTÍCULO 42.- Las bases que emitan las dependencias, entidades y Municipios para la modalidad de licitación pública, contendrán en función del tipo de trabajo, las características y la complejidad del caso; la información, documentación y requisitos que dentro de la siguiente relación sean indispensables para una correcta elaboración de las propuestas a presentarse y que garanticen la equitativa y justa valoración de la solvencia de dichas propuestas.

I. Nombre o denominación de la dependencia, entidad o municipio convocante.

II. Fecha, hora y lugar para la presentación y la apertura de proposiciones.

III. Fecha, hora y lugar de la visita al sitio de los trabajos, la que deberá llevarse al cabo dentro de un plazo no mayor a diez días naturales a partir de la fecha de la convocatoria, ni menor a siete días naturales anteriores a la fecha de presentación de proposiciones. La definición de las juntas de aclaración a las bases de la licitación, será optativa dentro de los mismos periodos señalados para la visita al sitio de los trabajos. Las aclaraciones deberán ser comunicadas por escrito a todos los licitantes, siendo responsabilidad del licitante verificar si hubo o no modificaciones posteriores a la junta de aclaración o al último comunicado de la dependencia, entidad o municipio convocante hasta siete días naturales antes de la apertura.

IV. Las garantías solicitadas de acuerdo a lo establecido en esta ley.

V. Plazo de ejecución para los trabajos determinado en días calendario, indicando la fecha estimada de inicio y aquellas de terminación de los mismos.

VI. Señalamiento de que será causa de descalificación, el incumplimiento de cualquiera de los requisitos indispensables establecidos en las bases de licitación.

VII. El idioma o idiomas además del español en que podrán presentarse las proposiciones.

VIII. La indicación de que ninguna de las condiciones en las bases de la licitación, así como en las proposiciones presentadas por los licitantes, podrán ser negociadas.

IX. Relación de materiales y equipos de instalación permanente que en su caso proporcionará la convocante.

X. Origen de los fondos para realizar los trabajos y el importe autorizado para el primer ejercicio, en el caso de que las obras rebasen un ejercicio presupuestal.

XI. Forma, términos y condiciones de pago de los trabajos objeto de contrato.

XII. Porcentaje, forma y términos del o los anticipos que se concedan.

XIII. Manifestación de que el licitante bajo su responsabilidad podrá o no subcontratar partes de la obra.

XIV. Criterios claros, detallados y fundamentados para la adjudicación de los trabajos.

XV. El procedimiento de ajuste de costos o importes, conforme lo establecido en esta ley.

XVI. Proyecto arquitectónico y de ingeniería con jerarquía de ejecutivos, que se requieran para la adecuada elaboración de la proposición; las normas de calidad de los materiales, especificaciones de construcción aplicables, el catálogo de conceptos a llenar el cual deberá contener: cantidades de trabajo, unidades de medición y relación de conceptos de trabajo, indicando de cuáles se deberán presentar los análisis de precios unitarios y los básicos correspondientes, así como la relación de los costos básicos de materiales, mano de obra y maquinaria de construcción que se requiera anexar.

XVII. Modelo del contrato.

ARTÍCULO 43.- Cualquier modificación a las bases de la licitación de obra pública, derivadas de las juntas de aclaración y las circulares correspondientes, será considerada como parte integrante de las propias bases de licitación.

En las licitaciones se deberán establecer los mismos requisitos y condiciones para todos los participantes, especialmente por lo que se refiere a tiempo y lugar de entrega, plazos de ejecución, normatividad, forma y tiempo de pago, penas convencionales, anticipos y garantías. En este sentido no podrán establecerse requisitos adicionales para la presentación de las propuestas y conducción de los actos de la licitación, distintas de las contenidas y oportunamente publicadas en las bases de referencia.

ARTÍCULO 44.- En el caso de la modalidad por invitación restringida, la convocante podrá establecer plazos, términos y requisitos distintos de los consignados en el articulado de esta ley de acuerdo con las necesidades y urgencias de las obras.

ARTÍCULO 45.- Para las modalidades de licitación pública y por invitación restringida, en la etapa de presentación y apertura de proposiciones, deberán participar los licitantes que se encuentren debidamente acreditados e inscritos.

El acto de presentación y apertura de propuestas, se llevará a cabo en dos etapas, la primera se denominará técnica y la segunda se denominará económica, presentándose cada una en un sobre cerrado, y deberán contener los siguientes documentos:

Primera Etapa.- Propuesta técnica.

I. Acreditación de la personalidad o carácter con el que se comparece.

II. Bases de licitación, emitidas por la convocante.

III. Modelo de contrato, proporcionado por la convocante.

IV. Recomendaciones especiales, emitidas por la convocante.

V. Constancia de visita al sitio de los trabajos a realizarse expedida por la convocante, así como de haber asistido o no a las juntas de aclaraciones que se hubieren celebrado.

VI. Circulares aclaratorias.

VII. Relación de materiales y de la maquinaria de construcción, así como de la mano de obra a utilizarse.

VIII. Relación de maquinaria y equipo de construcción, indicando si son de su propiedad, de empresas filiales o arrendados.

IX. Programas calendarizados de: ejecución de los trabajos, utilización de la maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalaciones especiales.

X. Relación de contratos de obras vigentes, celebrados con la administración pública o con los particulares, indicando su monto, periodo y avance físico-financiero.

XI. A juicio de la convocante, se podrá solicitar adicionalmente el procedimiento constructivo, dependiendo del tipo y características de la obra.

XII. A juicio de la convocante, se podrá solicitar adicionalmente carta compromiso del proveedor que garantice los precios de insumos prioritarios para la ejecución de la obra.

Para el caso de las consultorías, y prestación de servicios profesionales, la convocante podrá adecuar los requisitos anteriores a los requerimientos del caso.

Segunda Etapa.- Propuesta económica.

I. Garantía de seriedad de la propuesta en los términos de la convocatoria.

II. Carta compromiso de acuerdo al formato establecido en las bases de licitación.

III. Escrito de proposición de acuerdo al formato establecido en las bases de licitación.

IV. Datos básicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construcción, puestos en el sitio de los trabajos, así como de la mano de obra a utilizarse.

V. Integración de precios unitarios de los conceptos solicitados estructurados por costos directos, costos indirectos, costos de financiamiento y cargo por utilidad.

VI. Análisis del costo financiero en los términos establecidos en las bases de licitación.

VII. A juicio de la convocante, análisis de costos indirectos, de acuerdo al tipo y características de la obra.

VIII. Programa de montos mensuales de ejecución de los trabajos. A juicio de la convocante se podrán solicitar adicionalmente los programas de montos mensuales de la utilización de la maquinaria y equipo de construcción, adquisición de materiales y equipo de instalaciones especiales así como utilización del personal técnico, administrativo y de campo, de acuerdo al tipo y características de la obra.

IX. Catálogo de conceptos en los términos establecidos en las bases de licitación.

X. Los demás que establezcan la convocatoria y las bases de licitación.

Para el caso de las consultorías, y prestación de servicios profesionales, la convocante podrá adecuar los requisitos anteriores a los requerimientos del caso

ARTÍCULO 46.- El procedimiento para el acto de la apertura de las proposiciones técnicas será:

I. El acto estará presidido por el servidor público que designe la convocante, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar las proposiciones que se hubieren presentado en los términos de esta ley.

II. La convocante invitará a participar a un representante del órgano de control interno, uno de la dependencia encargada de las finanzas, uno de la dependencia normativa y un representante de la sociedad civil en los términos que establezca el reglamento de esta ley, pudiendo ser de la Organización Formal de la Construcción, de la Organización Formal de la Consultoría, los Colegios y Asociaciones de Profesionistas afines a la naturaleza de la obra que se trate o a un representante del Sistema Estatal o Municipal de los Consejos de Concertación Ciudadana.

III. Los licitantes entregarán sus proposiciones, técnicas y económicas en sobres cerrados en forma inviolable y se procederá a la apertura de la propuesta técnica exclusivamente.

IV. Se desecharán aquellas propuesta técnicas que hubieren omitido cualquiera de los requisitos exigidos, las que serán devueltas por la dependencia, entidad o municipio transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación.

V. Los licitantes, los servidores públicos, el representante de la sociedad civil, rubricarán el programa calendarizado de ejecución de obra, el procedimiento constructivo y la relación de maquinaria y equipo de las propuestas admitidas para su revisión detallada; la falta de alguna de las firmas no invalidará su contenido y efectos.

VI. Los licitantes, los servidores públicos y el representante de la sociedad civil, rubricarán los sobres cerrados de las propuestas económicas y quedarán en custodia de la convocante.

VII. Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar las propuestas técnicas aceptadas para su revisión detallada, así como las que hubieran sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los participantes y se les entregará a cada uno copia de la misma, se informará a los presentes la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el resultado de la revisión detallada de las propuestas técnicas, así como lo conducente para la apertura de las propuestas económicas de acuerdo a los tiempos señalados en la convocatoria y las bases de licitación.

VIII. Para el caso de la modalidad de invitación restringida de no recibir proposición alguna o de no contar por lo menos con tres propuestas aceptadas, la licitación se declarará desierta, situación que quedará asentada en el acta correspondiente.

IX. En los casos que se dé el supuesto anterior, se procederá a lo que se señale en esta ley.

ARTÍCULO 47.- El procedimiento para el acto de la apertura de las proposiciones económicas será:

I. Se procederá sólo a la apertura de las propuestas económicas de los licitantes cuyas propuestas técnicas hayan sido aceptadas.

II. El acto estará presidido por el servidor público que designe la convocante, quien será la única autoridad facultada para aceptar o desechar las proposiciones que se hubieren presentado en los términos de esta ley.

III. La convocante invitará a participar a un representante del órgano de control interno, uno de la dependencia encargada de las finanzas, uno de la dependencia normativa y un representante de la sociedad civil en los términos que establezca el reglamento de esta ley, pudiendo ser de la Organización Formal de la Construcción, de la Organización Formal de la Consultoría o de los Colegios y Asociaciones de Profesionistas afines a la naturaleza de la obra que se trate o un representante del Sistema Estatal o Municipal de los Consejos de Concertación Ciudadana. Los licitantes podrán a su criterio estar presentes en este acto.

IV. Los licitantes verificarán que los sobres que contengan las proposiciones económicas se encuentren debidamente cerrados y sin alteración alguna.

V. Se desecharán aquellas propuestas económicas que hubieren omitido cualquiera de los requisitos exigidos en las bases, las que serán devueltas por la convocante al concursante, una vez transcurridos quince días naturales contados a partir de la fecha en que se dé a conocer el fallo de la licitación, cuyos montos no serán dados a conocer durante este acto.

VI. Una vez que se cuente cuando menos con tres propuestas aceptadas para su revisión detallada, el servidor público que preside el acto leerá en voz alta el importe total de las mismas y los porcentajes de indirectos correspondientes.

VII. Los licitantes, los servidores públicos y el representante de la sociedad civil, rubricarán el catálogo de conceptos, los datos básicos de costos de materiales y del uso de la maquinaria de construcción así como los escritos de proposición correspondiente; la falta de alguna de las firmas no invalidará su contenido y efectos.

VIII. Se levantará el acta correspondiente en la que se harán constar los montos de las propuestas económicas aceptadas para su revisión detallada, así como las que hubieran sido desechadas y las causas que lo motivaron; el acta será firmada por los participantes que deseen hacerlo y se les entregará a cada uno copia de la misma, se informará a los presentes la fecha, lugar y hora en que se dará a conocer el dictamen y el fallo correspondientes.

IX. Se entregará a todos los licitantes un recibo por la garantía otorgada.

X. Para el caso de la modalidad por invitación restringida de no contar por lo menos con tres propuestas aceptadas para su revisión detallada, se declarará desierto el concurso, situación que quedará asentada en el acta.

XI. En los casos que se dé este supuesto, se procederá conforme a lo que se señale en esta ley.

ARTÍCULO 48.- La mecánica de revisión detallada de las propuestas técnicas y económicas así como los criterios de valoración y adjudicación de la obra será como sigue:

I. Una vez concluida la etapa de recepción de propuestas, la convocante procederá a la revisión detallada de cada documento de los que integran a las mismas, procediendo en su caso, a la descalificación de cualquier propuesta licitante que contenga en la documental referida omisiones o errores relevantes con respecto a las bases de la licitación.

II. Para su valoración se deberá revisar que el programa de ejecución sea factible de realizar con los recursos considerados por el contratista en el plazo de ejecución propuesto, que haya congruencia entre el programa de utilización de maquinaria y equipo de construcción, adquisición de los materiales preponderantes y equipos de instalación especial; que las características, especificaciones y calidad de los materiales sean las requeridas por la convocante. La utilización del personal técnico administrativo, resulte congruente con el porcentaje de indirecto presentado.

III. La convocante analizará debidamente el cálculo e integración de los precios solicitados conforme a las disposiciones de las bases de la licitación.

IV. Acto seguido, se procederá a dar lectura a los montos totales de cada propuesta recibida; a continuación, se descalificarán las propuestas que evidentemente, no sean congruentes con los rendimientos comúnmente aceptados en los tratados de análisis de precios unitarios, los costos y precios de maquinaria y equipo referidos al procedimiento constructivo correspondiente presentado por los licitantes en sus propuestas específicas, y que por ello pongan en riesgo la calidad de la obra. De las restantes que hayan cumplido con todos los requerimientos de la convocante, se emitirá resolución a favor de la propuesta que, en razón de los costos y tiempos que ofrece, cumpla, a juicio de la convocante, con los requisitos de capacidad financiera y técnica, experiencia mínima, residencia e inscripción en el padrón a que hace referencia esta ley.

La resolución que emita la convocante deberá estar fundada y motivada, evitando la competencia desleal y prácticas que vayan en perjuicio de la obra pública. Además de considerar que se garanticen las mejores condiciones para la convocante.

V. La convocante emitirá un dictamen que constituya el fundamento para el fallo, en el que hará constar el resultado del análisis detallado de las proposiciones admitidas, y se hará mención de las proposiciones desechadas, sustentando los motivos de su exclusión.

VI. El fallo deberá contener el orden de prelación en el que la convocante determine la preferencia en que ordenó a los concursantes.

VII. Contra el fallo emitido por la convocante, podrán interponerse el recurso señalado en el Capítulo VIII de esta ley.

ARTÍCULO 49.- La convocante no adjudicará la obra cuando a su juicio las posturas presentadas no reúnan los requisitos de las bases de licitación o sus precios no fueren aceptables o remunerativos, obligándose a expedir una segunda convocatoria, en un término no menor a 30 días.

ARTÍCULO 50.- En los casos de licitaciones en segunda convocatoria, se seguirá el mismo procedimiento que para la primera. Si como resultado de esta segunda licitación hubiere necesidad de declararlo desierto, la convocante podrá, bajo su responsabilidad, asignar en forma directa la ejecución de la obra motivo de la licitación de acuerdo a lo establecido en esta ley y en el reglamento correspondiente.

CAPÍTULO VI

DE LA CONTRATACIÓN.

ARTÍCULO 51.- Una vez resuelto el proceso de licitación y dado su respectivo fallo, la convocante y el adjudicatario suscribirán el contrato de obra correspondiente dentro de un plazo no mayor de diez días hábiles.

Si el interesado se negare a firmar el contrato perderá a favor de la convocante la garantía que hubiere otorgado y la dependencia, entidad o municipio podrán, sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al participante siguiente conforme al orden de prelación emitido en el fallo correspondiente, siempre que la diferencia en precio con respecto a la postura que inicialmente hubiere resultado ganadora, no sea superior al diez por ciento.

Si la convocante no firmare el contrato respectivo, el contratista, sin incurrir en responsabilidad, podrá determinar no ejecutar la obra. En este supuesto, la dependencia, entidad o municipio liberará la garantía otorgada para el sostenimiento de su proposición y cubrirá los gastos no recuperables en que hubiere incurrido el contratista para preparar y elaborar su propuesta, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con la licitación de que se trate.

Lo anterior sin perjuicio de las acciones que legalmente pueda realizar el contratista a efecto de lograr la debida suscripción del contrato de obra al que se hizo acreedor como resultado de una licitación formal.

El contratista a quien se adjudique la obra no podrá hacer ejecutar la obra por otro, pero, con autorización de la convocante si podrá subcontratar respecto de partes de la obra o cuando adquiera materiales o equipos que incluyan su instalación en la obra. Esta autorización previa no se requerirá cuando la contratante señale específicamente en las bases de licitación, las partes de la obra que podrán ser objeto de subcontratación. En todo caso, el contratista seguirá siendo el único responsable de la ejecución de la obra ante la contratante.

Las empresas con quienes se contrate la realización de obras públicas, podrán presentar conjuntamente proposiciones en las correspondientes licitaciones, sin necesidad de constituir una nueva sociedad, siempre que para tales efectos, desde el procedimiento de licitación y al celebrar el contrato respectivo, se establezcan con precisión y a satisfacción de la contratante, las partes de la obra que cada empresa se obligará a ejecutar, así como la manera en que, en su caso, se exigirá el cumplimiento de las obligaciones.

Los derechos y las obligaciones que se deriven de los contratos de obra pública no podrán cederse en forma parcial o total de cualesquiera otro contratista, con excepción de los derechos de cobro sobre las estimaciones por los trabajos ejecutados, en cuyo supuesto se deberá contar con la aceptación expresa previa y por escrito de la parte contratante de que se trate.

ARTÍCULO 52.- Para los efectos de esta ley, los contratos de obra pública, podrán ser:

- I. A precios unitarios, en cuyo caso el monto total de los trabajos ejecutados se cubrirá al contratista por unidad de trabajo terminado.
- II. A precio alzado, en cuyo caso el monto total de los trabajos por efectuar será previamente establecido a través de la propuesta de los contratistas y el cual quedará fijo.

En ambas modalidades, la ejecución de los trabajos se deberá cumplir en el plazo contractualmente establecido

Las proposiciones que presenten los contratistas para la celebración de estos contratos deberán estar desglosadas por grupo de actividades, de acuerdo con los catálogos de conceptos que apliquen en cada caso.

La convocante por ningún motivo podrá modificar las condiciones de contratación pactadas y publicadas desde la convocatoria de licitación.

ARTÍCULO 53.- En los contratos de obra pública se estipularán como mínimo las declaraciones y cláusulas siguientes:

I. La autorización de la inversión para cubrir el compromiso derivado del contrato y sus anexos.

II. El precio a total a pagar por los trabajos objeto del contrato y sus anexos.

III. El plazo de ejecución de los trabajos estipulado en días naturales, conteniendo la fecha de inicio y la de terminación.

IV. Los porcentajes, fechas de las exhibiciones y proceso de amortización de los anticipos para inicio de los trabajos, para compra o producción de materiales y del equipo e instalaciones especiales.

V. La forma y términos en que el contratista deberá garantizar la correcta inversión de los anticipos así como el debido cumplimiento del contrato y sus anexos.

VI. Los plazos, forma y lugar de pago de las estimaciones de trabajos ejecutados, así como de los ajustes de costos que en su caso tuvieran.

VII. Los montos de las penas convencionales, las que no podrán ser superiores, en conjunto, al monto de la garantía de cumplimiento.

VIII. La forma en que el contratista, reintegrará las cantidades que con motivo del contrato celebrado hubiere recibido en exceso durante la ejecución de la obra, ajustándose al procedimiento establecido en esta ley.

IX. El procedimiento y la metodología de ajuste de los costos, determinado en las bases de licitación y el cual deberá regir durante la vigencia del contrato.

X. La descripción pormenorizada de los trabajos a que se obligue el contratista a ejecutar, acompañando como parte integrante del contrato, lo establecido en la etapa de la licitación, los proyectos, planos, especificaciones, programas y presupuestos correspondientes así como las modificaciones, planos, correcciones y revisiones, órdenes, bitácora y especificaciones que surjan durante la ejecución de la obra, las cuales se incorporarán conforme se den en el proceso de vigencia de contrato.

XI. Los procedimientos mediante los cuales las partes entre sí, resolverán controversias y las discrepancias futuras o previsibles que pudieran presentarse sobre aspectos específicos de carácter técnico o administrativo.

XII. La disponibilidad del sitio y demás autorizaciones que se requieran para llevar al cabo los trabajos, tales como permisos, licencias, manifestaciones de impacto ambiental, entre otras.

XIII. Las obligaciones de la contratante.

XIV. Las obligaciones del contratista.

XV. Las causales de suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos.

XVI. Las fechas de terminación y los mecanismos de recepción y liquidación de los trabajos.

Los anexos de los contratos formarán parte del mismo.

ARTÍCULO 54.- El otorgamiento de los anticipos, deberá pactarse en los contratos de obra pública conforme a lo siguiente:

I. Los importes de los anticipos concedidos serán puestos a disposición del contratista con antelación a la fecha pactada para el inicio de los trabajos. El atraso en la entrega del anticipo diferirá en igual tiempo el programa de ejecución pactado.

II. El contratista en su proposición deberá considerar el importe de los anticipos y el mecanismo de amortización, para determinar en consecuencia el costo financiero de los trabajos.

III. Cuando el contratista no entregue la garantía de los anticipos dentro del plazo señalado, no procederá el diferimiento y por lo tanto deberá iniciar la obra en la fecha establecida originalmente. En caso que el contratista no entregase de forma alguna la garantía requerida, se hará acreedor a los procedimientos conducentes, establecidos en esta ley.

IV. No se otorgarán anticipos para el importe resultante de los ajustes de costo de los contratos.

V. Para los efectos de la amortización de los anticipos, en caso de rescisión del contrato, el saldo por amortizar deberá reintegrarse a la contratante en un plazo no mayor de quince días naturales, a partir de la fecha en que se haya

notificado la rescisión al contratista; en caso de incumplimiento se procederá a la aplicación de las sanciones estipuladas en esta ley y la aplicación de las fianzas de anticipo y cumplimiento.

ARTÍCULO 55.- Quienes participen en las licitaciones o celebren contratos regulados por esta ley, deberán garantizar lo estipulado optando por garantías mediante el empleo de títulos de crédito o con fianzas expedidas por las instituciones autorizadas en los términos de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas de acuerdo a los montos y porcentajes que a continuación se describen:

I. La seriedad de las propuestas en los procedimientos de licitación, se optará por garantizarla con una fianza que cubra el cinco por ciento del monto de la propuesta o bien, mediante un cheque no negociable, suscrito a nombre de la convocante, por el importe del mencionado porcentaje. En el supuesto de que el contratista retire su propuesta, la garantía será hecha efectiva por la convocante y además aquel será inhabilitado hasta por un año para participar en obras reguladas por esta ley.

Las garantías serán conservadas en custodia por la convocante hasta que se haya realizado el fallo, en que serán devueltas a los licitantes, salvo la de aquel quien hubiere resultado adjudicatario del contrato, la cual se retendrá hasta el momento en que dicho contratista constituya la garantía de cumplimiento del contrato correspondiente.

II. Los anticipos que en su caso reciban, deberán garantizarse por la totalidad del monto del anticipo.

III. El cumplimiento del contrato, con la garantía que cubra el importe que corresponda como máximo el diez por ciento del monto contratado o de la asignación del ejercicio de que se trate.

IV. Contra los vicios ocultos, se integrará una garantía que cubra el diez por ciento del monto ejercido y con vigencia de doce meses, a partir de la fecha de recepción, la cual será solicitada con cancelación automática a su vencimiento.

Las garantías previstas en las fracciones II y III de este artículo, deberán presentarse dentro de los siete días naturales siguientes a la fecha en que el contratista reciba copia simple del formato de contrato o del fallo de adjudicación y el o los anticipos correspondientes se entregarán, a más tardar dentro de los diez días naturales siguientes a la presentación de la garantía.

ARTÍCULO 56.- En tanto que los contratos de obra pública se encuentren vigentes y en ejecución dentro de los plazos establecidos y sea el caso de que por requerimientos de la obra, debidamente justificados y suscritos por las partes en la bitácora correspondiente, resulte necesaria la modificación o la ampliación en el alcance originalmente contratado, la contratante podrá autorizar, bajo su responsabilidad, dicha modificación o ampliación siempre y cuando no se rebase el veinticinco por ciento del monto original; en caso de no alterar el proyecto ni las condiciones de la obra, se podrán celebrar convenios adicionales entre las

partes. Estos convenios deberán ser autorizados bajo la responsabilidad del titular de la dependencia, entidad o municipio.

El monto y el plazo de ejecución de la modificación al contrato original deberán formalizarse a través del contrato modificatorio suscrito en tiempo y forma; la ausencia de este documento no podrá anular el derecho del contratista para exigir la remuneración de los conceptos adicionales ejecutados, debidamente asentados y autorizados en la bitácora de la obra.

Lo anterior corresponderá a conceptos nuevos, repetitivos o incremento en los volúmenes y ejecutados al amparo del contrato original así como del expediente técnico respectivo, mismos que se actualizarán de conformidad con los nuevos requerimientos.

Los precios contemplados en la modificación o ampliación del contrato no aceptarán variación alguna en lo relativo a los factores de indirectos financiamiento y utilidad.

Previo a la suscripción del contrato modificatorio o a la ampliación correspondiente, el contratista deberá otorgar las garantías adicionales correspondientes.

Los ajustes o incrementos de los precios unitarios contratados, serán sobre la base de lo estipulado en esta ley; dichos ajustes no se considerarán en el monto de la modificación o ampliación del contrato original.

TÍTULO IV

DE LA EJECUCIÓN, SUPERVISIÓN Y CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA.

CAPÍTULO I

DE LA EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN

ARTÍCULO 57.- Una vez adjudicada la obra, suscritos los documentos requeridos y recibido el anticipo correspondiente, la contratante dará posesión al contratista del sitio destinado a la obra y aquel deberá dar inicio a los trabajos en la fecha estipulada en el contrato; el contratista podrá iniciar la obra, si lo estimare conveniente y bajo su responsabilidad, aun antes de la recepción del anticipo.

Las dependencias, las entidades y los Municipios ejecutantes estarán obligados, en los términos de esta ley, a informar al órgano de control correspondiente del inicio, del avance y de la conclusión de las obras a su cargo.

En el momento del inicio, el representante de la contratista en la obra y el supervisor de la contratante, abrirán la bitácora correspondiente quienes serán los autorizados para hacer las anotaciones respectivas, además de aquellas personas que la contratante así lo designe.

CAPITULO II

DEL CONTROL DE LA OBRA PÚBLICA

ARTÍCULO 58.- Previo al inicio de la ejecución de las obras, la contratante establecerá la residencia del supervisor, quien será el responsable de la administración de la obra, el control y la vigilancia de los trabajos, los asientos en la bitácora así como de la revisión y la aprobación de las estimaciones correspondientes. Si la supervisión es externa, la contratante deberá dar la aprobación final.

Durante la fase de ejecución de la obra, el supervisor mantendrá al corriente los asientos en bitácora, con el representante del contratista, lo cual corresponderá a los hechos relevantes que sucedan durante el avance normal en este tipo de trabajos.

ARTÍCULO 59.- Las estimaciones de los trabajos ejecutados serán elaboradas y presentadas por el contratista a la dependencia, entidad o municipio contratante por períodos acordes al programa y duración de los trabajos contratados, en plazos no mayores a un mes, acompañadas de la documentación necesaria que acredite la procedencia de su pago.

Los Contratistas cubrirán el 2% sobre el importe de cada una de las estimaciones de trabajo, con derechos por los servicios de vigilancia, inspección y control necesario para la ejecución.

Dentro de un plazo no mayor de quince días naturales contados a partir de la fecha en que el residente de supervisión reciba las estimaciones por trabajos ejecutados, procederá a su revisión y aprobación, hecho lo cual la contratante hará el pago en un plazo no mayor de quince días naturales a partir de que el contratista presente la factura correspondiente.

Las diferencias técnicas o numéricas pendientes de pago se resolverán y, en su caso, serán incorporadas en la siguiente estimación.

ARTÍCULO 60.- Bajo las circunstancias de caso fortuito, fuerza mayor o causa justificada, las contratantes podrán suspender parcial o totalmente y de forma temporal o definitiva la ejecución de los trabajos, sin perjuicio de los derechos que asistan al contratista para los efectos económicos o las reclamaciones conducentes.

ARTÍCULO 61.- En la suspensión, rescisión administrativa o terminación anticipada de los contratos deberá observarse lo siguiente:

I. Cuando se determine la suspensión de los trabajos o se rescinda el contrato por causas imputables a la dependencia o entidad, ésta pagará los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables, siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate.

II. En caso de rescisión del contrato por causas imputables al contratista, una vez emitida la determinación respectiva, la dependencia, entidad o municipio precautoriamente y desde el inicio de la misma, se abstendrá de cubrir los importes resultantes de trabajos ejecutados aún no liquidados, hasta que se otorgue el finiquito que proceda, lo que deberá efectuarse dentro de los

treinta días naturales siguientes a la fecha de la comunicación de dicha determinación a fin de proceder a hacer efectivas las garantías. En el finiquito deberá preverse el sobrecosto de los trabajos aún no ejecutados que se encuentren atrasados conforme al programa vigente, así como lo relativo a la recuperación de los materiales y equipos que, en su caso, le hayan sido entregados.

III. Cuando se den por terminados anticipadamente los contratos, la dependencia, entidad o municipio pagará al contratista los trabajos ejecutados, así como los gastos no recuperables siempre que estos sean razonables, estén debidamente comprobados y se relacionen directamente con el contrato de que se trate, y

IV. Cuando por caso fortuito o fuerza mayor se imposibilite la continuación de los trabajos, el contratista podrá optar por no ejecutarlos. En este supuesto, si opta por la terminación anticipada del contrato, deberá solicitarla a la contratante quien determinará lo conducente dentro de los quince días siguientes a la presentación del escrito respectivo; en caso de negativa, será necesario que el contratista obtenga de la autoridad judicial la declaratoria procedente, pero si la contratante no contesta en dicho plazo, se tendrá por aceptada la petición del contratista.

Una vez comunicada por la contratante la terminación anticipada de los contratos o el inicio del procedimiento de rescisión de los mismos, ésta procederá a tomar inmediata posesión de los trabajos ejecutados para hacerse cargo del inmueble y de las instalaciones respectivas, levantado con o sin la comparecencia del contratista, acta circunstanciada del estado en que se encuentre la obra. En el caso de entidades, el acta circunstanciada se levantará ante la presencia de fedatario público. El contratista estará obligado a devolver a la contratante, en un plazo no mayor de diez días naturales, contados a partir del inicio del procedimiento respectivo, toda la documentación que ésta le hubiere entregado para la realización de los trabajos.

ARTÍCULO 62.- De ocurrir los supuestos señalados en el artículo anterior, en un plazo de tres días hábiles siguientes contados a partir de la suspensión, la contratante notificará la suspensión, rescisión o terminación anticipada del contrato al contratista y, posteriormente, hará de su conocimiento al órgano de control correspondiente.

ARTÍCULO 63.- Cuando ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, que determinen un aumento o reducción de los costos de los trabajos aún no ejecutados, conforme al programa pactado, dichos costos deberán ser revisados, atendiendo a lo acordado por las partes en el respectivo contrato. El aumento o reducción correspondiente deberá constar por escrito, mediante la suscripción del acta circunstanciada correspondiente.

ARTÍCULO 64.- El procedimiento de ajuste de costos a que se refiere el artículo anterior, deberá estipularse en el contrato, sujetándose a las siguientes disposiciones:

I. Los ajustes se calcularán a partir de la fecha en que se haya producido el incremento o decremento en los costos de los insumos respecto de los trabajos faltantes de ejecutar, conforme al programa convenido, o en caso de

existir un atraso no imputable al contratista con respecto del programa vigente.

II. Cuando el atraso sea por causas imputables al contratista, procederá el ajuste de costos para la obra que debiera estar pendiente de ejecutar conforme al programa convenido originalmente pactado.

III. Para efectos de la revisión y ajuste de los costos y la variación de la tasa de interés, la fecha de origen de los precios será la de siete días antes de la presentación de las proposiciones motivadas por la licitación correspondiente.

IV. Los incrementos o decrementos de los costos de los insumos, en el ámbito de distribuidor, serán calculados con base en los relativos publicados por el Banco de México, en el Diario Oficial de la Federación. Cuando los relativos que requiera el contratista o la contratante no se encuentren dentro de los publicados por ésta, las dependencias, entidades o Municipios procederán a calcularlos conforme a los precios que investiguen, utilizando los lineamientos y la metodología que para estos efectos expida la Secretaría de la Función Pública o utilizando los correspondientes al Índice Nacional de Precios al Consumidor que periódicamente publica el Banco de México.

V. Los precios originales del contrato permanecerán fijos hasta la terminación de los trabajos contratados. El ajuste se aplicará a los costos directos, conservando constantes los porcentajes de indirectos y utilidad originales durante el ejercicio del contrato. El costo por financiamiento estará sujeto a las variaciones de la tasa de interés que el contratista haya considerado en su propuesta, cuando aquellos varíen en cinco puntos o más.

VI. A petición por escrito que presente la contratista, la contratante realizará la revisión del ajuste pretendido, al que deberá acompañar de la documentación comprobatoria necesaria y en su caso la contratante, dentro de los quince días naturales siguientes, con base en la documentación aportada por el contratista, resolverá sobre la procedencia o improcedencia de la solicitud.

VII. El ajuste de costos que corresponda a los trabajos ejecutados conforme a las estimaciones correspondientes, deberá cubrirse por parte de las dependencias, entidades o Municipios a más tardar dentro de los quince días naturales siguientes a la fecha de la aprobación de la solicitud.

ARTÍCULO 65.- En caso de incumplimiento en los pagos de las estimaciones y de los ajustes de costos, la contratante, a solicitud del contratista, deberá pagar los gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación, para ser aplicada en los casos de prórroga para el pago de los créditos fiscales. Dichos gastos se calcularán sobre las cantidades no pagadas y se computarán por días calendario desde que se venció el plazo hasta la fecha en que efectivamente se pongan a disposición del contratista las cantidades que correspondan.

Tratándose de pagos en exceso que haya recibido el contratista, éste deberá reintegrarlos, adicionados con los intereses correspondientes, conforme a una tasa que será igual a la establecida por la Ley de Ingresos de la Federación para los casos de prórroga para el pago

de créditos fiscales. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha de recepción y pago hasta la fecha en que las cantidades se pongan a disposición de la dependencia, entidad o municipio.

CAPÍTULO III

DE LA TERMINACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS

ARTÍCULO 66.- El contratista comunicará por escrito a la contratante la terminación de los trabajos objeto de cada contrato, procediendo ésta a verificar que estén debidamente concluidos.

Una vez que se haya constatado la terminación de los trabajos en los términos del párrafo anterior, el contratista procederá al cierre administrativo y se obliga a entregarlos en un plazo no mayor a quince días naturales contados a partir de la verificación física de estos, en tanto el contratista no cumpla con esta obligación, no se podrá firmar el acta de entrega-recepción.

La contratante, informará por escrito al órgano de control correspondiente, la terminación de los trabajos y la fecha señalada para su recepción a fin de que éstas, si lo estiman conveniente, nombren a un representante para que asista al acto de recepción que será dentro del plazo referido en el párrafo anterior

En la fecha señalada, la contratante bajo su responsabilidad, recibirá los trabajos ejecutados levantando el acta correspondiente. Si ha transcurrido el plazo que se menciona en el párrafo segundo y la dependencia, entidad o municipio por causas imputables a éstas aun no hayan recibido o se negaren a recibir dichos trabajos, el contratista podrá entregarlos directamente al órgano de control correspondiente debiendo notificar lo anterior, por escrito, a la contratante.

Los gastos que se ocasionen por concepto de custodia y resguardo en los supuestos del párrafo anterior, serán a cargo de la contratante.

ARTÍCULO 67.- Concluidos los trabajos, no obstante su recepción formal, el contratista quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en los mismos, de los vicios ocultos y de cualesquiera otras responsabilidades en que hubiera incurrido, en los términos señalados en el contrato respectivo.

La garantía expedida para este efecto, deberá cumplir con lo señalado en el articulado de esta ley.

Si transcurridos doce meses a partir de la fecha de recepción de los trabajos, no se hubiera presentado reclamación alguna respecto de los supuestos contemplados en el párrafo anterior, la fianza entregada en garantía quedará automáticamente cancelada o las garantías liberadas y cesarán de forma absoluta cualesquiera responsabilidades del contratista con respecto de la misma.

ARTÍCULO 68.- El contratista será el único responsable de la adecuada ejecución de los trabajos y deberá sujetarse a todos los reglamentos y ordenamientos de las autoridades competentes en materia de construcción, seguridad, medio ambiente y uso de la vía pública

así como de las disposiciones establecidas al efecto por la contratante; las responsabilidades, así como los daños y perjuicios que resultaren por su inobservancia, serán a cargo del contratista.

ARTÍCULO 69.- Una vez concluida la obra, o parte utilizable de la misma, el órgano de control correspondiente vigilará que la unidad que deba operarla, reciba oportunamente de la autoridad responsable de su ejecución, la obra en condiciones de operación, los planos definitivos autorizados acordes a la misma, las normas y especificaciones que fueron aplicadas durante su ejecución, así como los manuales e instructivos para su funcionamiento, conservación, mantenimiento correspondientes y los certificados de garantía de calidad de los bienes instalados.

ARTÍCULO 70.- La contratante u organismo operador al que se le consigne la responsabilidad de una obra pública terminada, se obliga por conducto de la unidad administrativa correspondiente, a mantenerla en niveles adecuados de operación y funcionamiento. Los órganos internos de control vigilarán que su uso, operación, mantenimiento y conservación, se realicen conforme a los fines, objetivos y períodos de los programas respectivos.

TÍTULO V

DE LA OBRA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA

Y DE LAS EXCEPCIONES.

CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO 71.- Las dependencias, entidades y Municipios podrán realizar obra pública por administración directa, siempre y cuando cuenten para tal efecto, con el total de los recursos financieros y técnicos necesarios consistentes en la maquinaria y el equipo de construcción que se requiera, así como el personal especializado para el adecuado, oportuno y menos gravoso desarrollo de los trabajos respectivos.

Además podrá realizar la obra pública bajo esta modalidad solamente en los siguientes supuestos:

I. Cuando se trate de obras públicas derivadas de un programa específico para beneficio de la comunidad en los cuales los beneficiarios del lugar donde se ubique el sitio de los trabajos sean partícipes en forma directa.

Para tales efectos, la dependencia entidad o ayuntamiento deberá formalizar el comité de obra en el cual se especificará la forma de participación de los beneficiarios.

II. Cuando se trate de obra de mantenimiento, y no sea posible elaborar el catálogo de conceptos.

III. Ante la negativa de todos los contratistas inscritos en el padrón a que hace referencia el artículo 20 de esta ley a participar en cualquiera de las modalidades a que se hace referencia en el presente ordenamiento.

ARTÍCULO 72.- Los materiales e insumos para la ejecución de la obra por administración directa serán adquiridos bajo el siguiente procedimiento:

Se integrará en la dependencia, entidad o municipio el comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Contratación de Servicios, en el que participarán servidores públicos de éstas y estructurado de la siguiente manera:

- a) Un presidente
- b) Un secretario técnico
- c) Un primer vocal
- d) Un segundo vocal
- e) Un tercer vocal

La integración específica y funcionamiento del comité quedará bajo los lineamientos del reglamento correspondiente.

En la ejecución de obra por administración directa, no podrán participar terceros con la calidad de contratistas, independientemente de las modalidades que se adopten.

Los servidores públicos que ordenen y aquellos que tengan a su cargo la ejecución de obra pública en esta modalidad, serán responsables de la observancia escrupulosa sobre la condición de incurrir en precios superiores a los del libre mercado, toda vez que los cargos por indirectos y utilidad no proceden.

Para ejecutar obra pública por administración directa, se deberá contar con el acuerdo respectivo, planos, especificaciones y programas de ejecución y suministros.

El incumplimiento a lo previsto en esta ley será motivo de responsabilidad en los términos de la ley correspondiente.

TÍTULO VI

DE LA INFORMACIÓN Y VERIFICACIÓN.

CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO 73.- La forma y términos en que las dependencias, entidades o Municipios deberán remitir al órgano de control correspondiente la información relativa a los actos y contratos materia de esta ley, serán establecidas de manera sistemática y coordinada por estas últimas en el ámbito de sus respectivas competencias.

Para tal efecto las dependencias, entidades Municipios conservarán toda la documentación comprobatoria de dichos actos y contratos cuando menos por un lapso de tres años, contados a partir de la fecha de su recepción.

ARTÍCULO 74.- La comprobación de la calidad y de las especificaciones de la obra pública, se hará en los laboratorios debidamente certificados y aceptados por la contratante o en su caso, podrán ser aquellos con los que cuenten las dependencias, entidades o Municipios, así como cualquier tercero con la capacidad necesaria demostrable, para practicar la comprobación de los parámetros a que se refiere este artículo.

El resultado de las comprobaciones se hará constar en un dictamen que será firmado por el perito que realice la verificación, así como por el contratista y el representante de la contratante adquirente que hubiere intervenido.

El órgano de control podrá verificar en cualquier tiempo que las obras y servicios se realicen según lo establecido en esta ley, así también podrá solicitar, a contratante y contratista datos e informes y podrá hacer visitas e inspecciones que consideren necesarias.

TÍTULO VII

DE LAS INFRACCIONES Y LAS SANCIONES.

CAPÍTULO ÚNICO.

ARTÍCULO 75.- Los licitantes o contratistas que infrinjan las disposiciones de esta ley, serán sancionados por el órgano de control correspondiente, con multa equivalente a la cantidad de cincuenta hasta mil veces el salario mínimo general vigente en el Estado en la fecha de la infracción

ARTÍCULO 76.- El órgano de control correspondiente además de la sanción a que se refiere el artículo anterior, inhabilitará temporalmente para participar en procedimientos de contratación o celebrar contratos regulados por esta ley, cuando se encuentren en uno de los supuestos siguientes:

- I. Los licitantes que injustificadamente y por causas imputables a los mismos no formalicen el contrato adjudicado por la convocante.
- II. Los contratistas que se encuentren en la fracción III del artículo 27 de este ordenamiento, respecto de dos o más dependencias o entidades.
- III. Los contratistas que no cumplan con sus obligaciones contractuales por causas imputables a ellos y que, como consecuencia, causen daños o perjuicios graves a la dependencia, entidad o municipio de que se trate; y
- IV. Los licitantes o contratistas que proporcionen información falsa, o que actúen con dolo o mala fe en algún procedimiento de contratación, en la celebración de un contrato o durante su vigencia, o bien, en la prestación o desahogo de una queja en audiencia de conciliación o de una inconformidad.

La inhabilitación que imponga no será menor de tres meses ni mayor de 5 años, plazo en que comenzará a contarse a partir del día siguiente a la fecha en que la Contraloría haga del

conocimiento de las dependencias y entidades, mediante la publicación de la circular respectiva en el periódico oficial de Gobierno del Estado.

Las dependencias y entidades, dentro de los quince días siguientes a la fecha en que tengan conocimiento de alguna infracción a las disposiciones de esta ley, remitirán a la contraloría documentación comprobatoria de los hechos presumiblemente constitutivos de la infracción

ARTÍCULO 77.- El órgano de control correspondiente impondrá las sanciones considerando:

- I. Los daños o perjuicios que se hubieren producido o puedan producirse.
- II. El carácter intencional o no de la acción u omisión constitutiva de la infracción.
- III. La gravedad de la infracción, y
- IV. Las condiciones del infractor.

El órgano de control correspondiente impondrá las sanciones administrativas de que trata este Título, con base en las disposiciones relativas a la legislación aplicable a la materia.

ARTÍCULO 78.- El órgano de control correspondiente aplicará las sanciones que procedan, conforme a lo dispuesto por la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, a los servidores públicos que infrinjan las disposiciones de este ordenamiento.

ARTÍCULO 79.- Las responsabilidades a que se refiere la presente ley serán independientes de las de orden civil o penal que puedan derivar de comisión de los mismos hechos.

ARTÍCULO 80.- Cuando se haya incurrido en infracción por causas de fuerza mayor o de caso fortuito, o cuando se observe en forma espontánea el precepto que se hubiese dejado de cumplir, no se impondrán sanciones. No se considerará que el cumplimiento es espontáneo cuando la omisión sea descubierta por las autoridades o medie requerimiento, visita, excitativa o cualquier otra gestión efectuada por las mismas.

TÍTULO VIII

DEL RECURSO DE REVOCACIÓN.

CAPÍTULO UNICO

ARTÍCULO 81.- Los interesados podrán interponer el recurso de revocación ante el órgano de control correspondiente, en contra de los actos que contravengan a las disposiciones que rigen a la materia objeto de esta ley, debiendo el interesado interponerlo dentro del término de los diez días naturales siguientes a la fecha de la notificación, o bien, a partir de que el inconforme tenga conocimiento del acto impugnado el que se tramitará conforme a las normas siguientes:

I. Se interpondrá por el recurrente mediante escrito en el que se expresarán los agravios que el acto impugnado le cause, ofreciendo las pruebas que se proponga rendir y que sustenten su dicho, acompañando copia de la resolución impugnada, así como la constancia de la notificación de esta última, excepto si la notificación se hizo por correo.

II. Si el recurrente así lo solicita en su escrito, se suspenderá el acto que reclama, siempre y cuando garantice mediante fianza los daños y perjuicios que le pudiera ocasionar al Estado o a terceros, cuyo monto será fijado por el órgano de control correspondiente, el cual no será inferior al equivalente del diez por ciento ni superior al cincuenta por ciento del valor del objeto del acto impugnado. Sin embargo, el tercero perjudicado podrá otorgar contrafianza equivalente a la que corresponda a la fianza anterior, en cuyo caso quedará sin efecto la suspensión. No procederá la suspensión en los casos en que se ponga en peligro la seguridad estatal o el orden social. Si la resolución que se impugna consiste en la imposición de multas, la suspensión se otorgará siempre y cuando se garantice el interés fiscal en cualquiera de las formas previstas en el Código Fiscal de la Federación.

III. En el recurso no será admisible la prueba confesoria de las autoridades. Si dentro del trámite que haya dado origen a la resolución recurrida, el interesado tuvo oportunidad razonable de rendir pruebas, sin hacerlo, sólo se admitirán en el Recurso las que hubiere allegado con tal oportunidad.

IV. Las pruebas que ofrezca el recurrente deberá relacionarlas con cada uno de los hechos controvertidos y sin el cumplimiento de este requisito, serán desechadas.

V. Se tendrán por no ofrecidas las pruebas de documentos, si estas no se acompañan al escrito en que se interponga el recurso y en ningún caso serán recabadas por la autoridad, salvo que obren en el expediente en que se haya originado la resolución recurrida.

VI. La prueba pericial se desahogará con la presentación del dictamen a cargo del perito designado por la recurrente. De no presentarse el dictamen en el término de ley, la prueba será declarada inexistente.

VII. El órgano de control correspondiente podrá solicitar que se le rindan los informes que estimen pertinentes por parte de aquellos que hayan intervenido en el o los actos reclamados.

VIII. El órgano de control correspondiente acordará lo conducente sobre la admisión o rechazo del recurso y de las pruebas que el recurrente hubiere ofrecido, las que deberán ser pertinentes e idóneas para dilucidar las cuestiones controvertidas y ordenará el desahogo de las mismas dentro del plazo de los quince días hábiles siguientes, el cual será improrrogable.

IX. Una vez vencido el plazo para la rendición de pruebas, el órgano de control correspondiente dictará las resoluciones pertinentes en un plazo que

no excederá de quince días hábiles. En el caso de que la resolución no sea dictada en el plazo señalado, procederá la afirmativa ficta.

ARTÍCULO 82.- La resolución que emita el órgano de control correspondiente, sin perjuicio de la responsabilidad que proceda respecto de los servidores públicos que hayan intervenido, tendrá por consecuencia:

I. La nulidad del procedimiento, estableciendo las directrices necesarias para que el mismo se realice conforme a esta ley.

II. La declaración de improcedencia del recurso interpuesto.

ARTICULO 83.- En contra de las resoluciones emitidas por el órgano de control, el interesado podrá interponer recurso de inconformidad ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, en los términos de su ley reglamentaria.

TRANSITORIOS

ARTÍCULO PRIMERO.- La presente ley entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Periódico Oficial La Sombra de Arteaga.

ARTÍCULO SEGUNDO.- Se abroga la Ley de Obra Pública publicada en el Periódico Oficial del Gobierno de Estado en fecha 13 de febrero de 1986.

ARTÍCULO TERCERO.- Se derogan todas las disposiciones que se opongan a la presente.

ARTÍCULO CUARTO.- El Ejecutivo del Estado expedirá el reglamento de esta ley en un término no mayor de tres meses, contados a partir de la publicación de la presente.

ARTÍCULO QUINTO.- Las disposiciones administrativas expedidas en esta materia, vigentes al momento de la publicación de este ordenamiento se seguirán aplicando en todo lo que no se opongan a la presente ley, en tanto se expidan las que deban sustituirlas.

ARTÍCULO SEXTO.- Los procedimientos de contratación, de aplicación de sanciones y de inconformidades, así como los demás asuntos que se encuentren en trámite o pendiente de solución se tramitarán y resolverán conforme a las disposiciones vigentes al momento en que se inician.

ARTÍCULO SÉPTIMO.- Los contratos de obra pública y servicios relacionados con las mismas que se encuentren vigentes al entrar en vigor esta ley, continuarán rigiéndose por las disposiciones vigentes en el momento en que se celebraron.

ARTICULO OCTAVO.- Al inicio de la vigencia de la Ley de Procedimiento Administrativo, quedará sin efectos en su totalidad, el capítulo VIII de la presente ley.

LO TENDRÁ ENTENDIDO EL CIUDADANO GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO Y MANDARÁ SE IMPRIMA, PUBLIQUE Y OBSERVE.

DADA EN EL RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO A LOS ONCE DÍAS DEL MES DE SEPTIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRES.

A T E N T A M E N T E

LIII LEGISLATURA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

COMISIÓN PERMANENTE EN FUNCIONES DE MESA DIRECTIVA

De conformidad con lo establecido por los artículos 43 y 44 fracciones I y XII de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga, en correlación con los diversos numerales 24 fracción II, 31 fracción IV, 37 fracción X, 41, 43, 44 y 48 fracción XI de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado Libre y Soberano de Querétaro.

DIP. MA. AIDEE GUERRA DALLIDET

PRESIDENTE

Rúbrica

DIP. ODILÓN HERNÁNDEZ GUERRERO

VICEPRESIDENTE

Rúbrica

DIP. MACLOVIO LUGO URIAS

PRIMER SECRETARIO

Rúbrica

DIP. JOSÉ ALFREDO PIÑA GONZÁLEZ

SEGUNDO SECRETARIO

Rúbrica

Lic. Francisco Garrido Patrón, Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro, en ejercicio de lo dispuesto por el artículo 57 fracción I de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Querétaro Arteaga; expido y promulgo la presente Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, en el Palacio de la Corregidora, sede del Poder Ejecutivo del Estado a los once días del mes de noviembre del año dos mil tres, para su debida publicación y observancia.

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION.

LIC. FRANCISCO GARRIDO PATRÓN

**GOBERNADOR CONSTITUCIONAL
DEL ESTADO**

Rúbrica

LIC. JOSÉ ALFREDO BOTELLO MONTES

SECRETARIO DE GOBIERNO

Rúbrica

Ley publicada en el periódico oficial del Estado "La Sombra de Arteaga" el día 12 de noviembre de 2002 (No.68)